



**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN DERECHO

Departamento de Derecho Privado

Derecho Civil

Curso 2016/2017

ESTUDIO DE DERECHO COMPARADO SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS APELLIDOS

MÓNICA MARÍA ROJO MARTÍN

Tutor / FELISA MARÍA CORVO LÓPEZ

Junio 2017

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN DERECHO

Departamento de Derecho Privado

Área de Derecho Civil

**ESTUDIO DE DERECHO
COMPARADO SOBRE EL RÉGIMEN
JURÍDICO DE LOS APELLIDOS**

**STUDY OF COMPARATIVE LAW ON
THE LEGAL REGIME OF
SURNAME**

Nombre del/la estudiante: MÓNICA MARÍA ROJO MARTÍN
e-mail del/a estudiante: monicarjm@usal.es

Tutor/a: FELISA MARÍA CORVO LÓPEZ

RESUMEN

El presente trabajo tiene por objeto analizar la regulación del orden de los apellidos en España, realizando un estudio de Derecho comparado tomando como referencia la normativa existente en algunos países de la Unión Europea.

En la primera parte del trabajo se lleva a cabo un análisis de la normativa internacional y europea sobre los apellidos y el orden de los mismos. En la segunda, se analiza el régimen jurídico de los apellidos en el Ordenamiento español.

En el tercero y último se aborda el estudio de la normativa que regula los apellidos en algunos países vecinos de la Unión Europea, como Francia, Portugal e Italia, comparando dichas regulaciones con la normativa española.

PALABRAS CLAVE: filiación, apellidos, derecho comparado.

ABSTRACT

The objective of this piece of work is to analyse the regulation of the order of surnames in Spain. It is a comparative study which makes reference to the current norms in a select group of countries within the European Union, such as France, Portugal and Italy.

In the first part an analysis on the international and European norms in regards to surnames and the order in which they appear will be carried out. In the second part the legal regime of surnames in regards to Spain will be analysed.

In the third and final section, this work will focus on studying the norms that are present in some neighboring countries, also within the EU, such as France, Portugal and Italy, comparing the said regulations with the norms present in Spain.

KEYWORDS: filiation, surnames, comparative law.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	5
-------------------	---

I. EL RÉGIMEN DE LOS APELLIDOS EN EL PANORAMA INTERNACIONAL Y EUROPEO	7
--	----------

1. El régimen internacional de los apellidos..... 7
2. El régimen comunitario de los apellidos 9

II. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS APELLIDOS EN EL DERECHO ESPAÑOL	13
---	-----------

1. El origen de los apellidos en el ordenamiento jurídico español 13
2. Evolución legislativa de la transmisión de los apellidos 13
 - 2.1 *Etapa preconstitucional* 13
 - 2.2 *La Constitución de 1978 como punto de inflexión*..... 14
 - 2.3 *La ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación del Código Civil*..... 15
 - 2.4 *Modificación del Reglamento del Registro Civil de 1986*..... 16
 - 2.5 *La ley 40/1999, de 5 de noviembre, por la que se regulan los nombres y apellidos y el orden de los mismos*..... 16
 - 2.6 *La Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio* 20
 - 2.7 *La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil*..... 21
 - 2.7.1 Referencia al interés superior del menor 25
3. Cambio de los apellidos en los supuestos de violencia de género..... 27

III. ESTUDIO COMPARADO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS APELLIDOS. ESPECIAL REFERENCIA A PORTUGAL, FRANCIA E ITALIA	30
---	-----------

1. Portugal..... 30
 - 1.1 *Normativa*..... 30
 - 1.2 *Estudio comparado* 33
2. Francia 34
 - 2.1 *Normativa*..... 34
 - 2.2 *Estudio comparado* 39

3. Italia.....	40
3.1 Normativa.....	40
3.2 Análisis jurisprudencial a raíz del juicio NO. 286 del 8 de noviembre - 21 de diciembre de 2016 de la Corte Constitucional Italiana.	44
3.3 Estudio comparado	47
CONCLUSIONES	49
BIBLIOGRAFÍA	52
LEGISLACIÓN.....	55
1. Normas, Declaraciones y Convenios Internacionales	55
2. Normativa española	56
3. Ordenamientos jurídicos extranjeros	56
3.1 Portugal.....	56
3.2 Francia.....	56
3.3 Italia	57

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objeto analizar la regulación del orden de los apellidos en España, realizando un estudio de Derecho comparado tomando como referencia la normativa existente en algunos países de la Unión Europea, como Francia, Italia y Portugal.

En el momento en que nos encontramos, el principio de igualdad y no discriminación de sexos forma parte de la realidad social, que obliga al Derecho a evolucionar para adaptarse a las nuevas situaciones y no permite justificar un trato distinto en función del sexo en relación a la determinación de los apellidos. Tanto en el ámbito internacional como desde la Unión Europea existen diversos convenios, resoluciones y recomendaciones que pretenden armonizar las legislaciones de los Estados Miembros en materia de apellidos con estos principios. Pero esta adecuación no se ha llevado a cabo con la misma intensidad en todos los Estados Miembros, y por ello analizaré la legislación de algunos de ellos.

Este tema es relevante en la actualidad, pues, en España, con la Ley 20/2011 del Registro Civil, desaparece toda concepción discriminatoria de la persona y esta ley pretende fomentar el acuerdo de los padres y acabar con la tradicional prevalencia del apellido paterno frente al materno, que implica un trato discriminatorio por razón del sexo, contrario al artículo 14 de nuestra Constitución de 1978. Sin embargo, sólo una pequeña parte de esta ley entró en vigor en el año 2015; la entrada en vigor del resto de la ley se prorrogó hasta el 30 de junio de 2017, por lo que, de momento, el criterio que prevalece es el de la primacía del apellido del padre. Mas es posible que se posponga nuevamente la entrada en vigor y tardemos un poco más en ver efectivamente cumplido ese principio de igualdad de sexos en materia de apellidos.

Para la realización de este trabajo me he basado en el análisis de la legislación de España, Francia, Italia y Portugal, a fin de comprobar las diferencias y similitudes existentes entre los mismos, así como en el estudio de diferentes resoluciones jurisprudenciales, particularmente extranjeras; la consulta de doctrina sobre la legislación de los países de nuestro entorno anteriormente indicados ha resultado bastante más difícil.

En cuanto a la sistemática, el trabajo se encuentra dividido en tres capítulos. En el primero, presentamos -a modo de introducción- la normativa existente en el ámbito

internacional y europeo sobre los apellidos y el orden de los mismos, que ha influido notablemente en su posterior regulación por el derecho interno de cada Estado. El segundo capítulo está dedicado al régimen jurídico de los apellidos en España; en él, se estudia el origen de dicha regulación, así como toda la evolución que ha sufrido desde la etapa preconstitucional hasta la Ley 20/2011 del Registro Civil, haciendo referencia a dos cuestiones de especial interés: a) los problemas de interpretación del denominado “interés superior del menor” que lleva consigo esta ley; b) la posibilidad de cambiar los apellidos en los supuestos de violencia de género. El tercer y último capítulo se centra en el análisis de la normativa vigente sobre los apellidos en algunos países vecinos: Francia, Italia y Portugal; en él, se resaltan las diferencias y similitudes existentes entre estos regímenes y la normativa española sobre este tema y se traen a colación importantes resoluciones judiciales como la Sentencia NO. 286 de 8 de noviembre - 21 de diciembre de 2016 de la Corte Constitucional Italiana; no en vano, la normativa italiana es la que se revela más dispar y la referida sentencia supone un cambio reciente sobre el tratamiento de los apellidos en este país.

I. EL RÉGIMEN DE LOS APELLIDOS EN EL PANORAMA INTERNACIONAL Y EUROPEO

Es universal la necesidad que existe en toda comunidad de individualizar e identificar a las personas mediante el nombre y apellidos, aunque las características de los mismos varíen en función de elementos culturales del lugar.

1. El régimen internacional de los apellidos

En el ámbito internacional, las primeras declaraciones tuvieron como objeto proteger el derecho al nombre de los niños. Así encontramos algunos preceptos donde se habla del “*derecho al nombre*” en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 29 de diciembre de 1966¹.

Donde se habla del nombre junto con los apellidos por primera vez es en la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada en Nueva York por las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, y ratificada por España en 1984. Establecía en su artículo 16.1 que “*los Estados parte adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres*”. Además, se enumeran una serie de supuestos en los que es necesario que se fomenten dicha igualdad, entre los que se encuentra en el apartado g): “*los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, profesión y ocupación*”. De manera que, a pesar de que dicha Convención date de 1979 y haya sido ratificada por España en 1984, queda latente, como veremos, que décadas después aún no se ha conseguido la plena igualdad entre los cónyuges en relación al apellido de sus progenitores en lo que respecta a la legislación española².

En el ámbito internacional también contamos con la Comisión Internacional del Estado Civil pues, a pesar de que la mayoría de sus Estados parte sean de Europa, también se permite que se incorporen terceros Estados siempre que formen parte de la

¹ Principio 3 de la Declaración Universal de los Derechos del Niño de 1959: “*el niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad*”.

Artículo 24.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966: “*todo niño deberá ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre*”.

² FERNÁNDEZ PÉREZ, E.A, “*El nombre y los apellidos, su regulación en derecho español y comparado*” (Tesis doctoral) Universidad de Sevilla, Sevilla. 2015, Pg. 523. Disponible en <https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/32106/TESIS%20definitiva.pdf;sequence=1>

Convención para la salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, o bien del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Algunos de los Convenios de la Comisión que afectan directamente al nombre y a los apellidos y que han sido ratificados por España son:

- Convenio N°4 sobre cambio de nombres y apellidos de 1958, ratificado por España en 1976. Se estipula que los estados no podrán conceder un cambio de nombre o apellido a ciudadanos de otros estados, salvo que también sean ciudadanos del mismo. Además, los cambios de nombre o apellidos por un Estado a uno de sus nacionales será válido respecto a otro Estado del que el nacional es residente³.
- Convenio N°19 sobre ley aplicable a nombre y apellidos de 1980, ratificado por España en 1989. Se establece que el nombre y los apellidos de una persona se determina por la ley del Estado del que esta es nacional. Por lo tanto, el cambio de nacionalidad conlleva aplicar la ley del nuevo Estado⁴.
- Convenio N°21 sobre expedición de certificados de diversidad de apellidos de 1982, ratificado por España en 1988. Se regula un certificado de diversidad de apellidos para facilitar la prueba de identidad a aquellos que tengan diferentes apellidos como consecuencia de las distintas legislaciones de los Estados parte⁵.
- Convenio N°31 sobre el reconocimiento de apellidos atribuidos al nacer o modificados, especialmente por razón de matrimonio, divorcio o cualquier otra causa de 2005. Este Convenio no ha sido ratificado por España ya podría afectar

³ Artículo 2: “Cada estado contratante se obliga a no conceder cambios de apellidos o de nombres a los súbditos de otro estado contratante, salvo en el caso de que fueren igualmente súbditos suyos”.

Artículo 3: “Serán ejecutivas de pleno derecho en el territorio de cada uno de los estados contratantes, a reserva de que las mismas atentaren contra el orden público respectivo, las resoluciones definitivas recaídas en uno de tales estados y que concedieren un cambio de apellidos o de nombres, bien a su súbditos, bien a apátridas o a refugiados en el sentido del convenio de ginebra de 28 de julio de 1951, cuando los mismos tuvieren su domicilio o, en defecto de domicilio, su residencia en su territorio. Tales resoluciones serán, sin más formalidad, anotadas al margen de las actas de estado civil de las personas a las cuales concernieren”.

⁴ Artículo 1: “1. Los nombres y apellidos de una persona se determinarán por la ley del Estado del cual dicha persona sea nacional. Sólo a este efecto, las situaciones de que dependan los nombres y apellidos se apreciarán según la ley de dicho Estado. 2. En caso de cambio de nacionalidad, se aplicará la ley del Estado de la nueva nacionalidad”.

⁵ Artículo 1: “1. El certificado de diversidad de apellidos establecido en el presente Convenio estará destinado a facilitar la prueba de su identidad a las personas que, a consecuencia de las diferencias existentes entre las legislaciones de ciertos Estados, especialmente en lo referente a matrimonio, filiación o adopción, no son designados por un mismo apellido. 2. Dicho certificado tendrá como único objeto hacer constar que los diversos apellidos que en él figuran, designan, según legislaciones diferentes, a una persona. No podrá tener como objeto afectar a las disposiciones legales vigentes que rigen en materia de apellidos”.

en nuestro sistema de doble apellido, pues trata los supuestos en los que los que un cónyuge modifica su apellido por razón del matrimonio y las consecuencias que tendría tras la separación o divorcio, y en España el matrimonio no supone una modificación de los apellidos de los cónyuges.

2. El régimen comunitario de los apellidos

En el ámbito europeo no se ha producido una armonización sobre el Derecho privado, pues prima la diversidad legislativa en aquellas materias que están especialmente unidas a la configuración social de cada Estado⁶.

El apellido siempre se ha considerado adscrito al control de cada Estado, pero se ha ido avanzando en su tratamiento por la importancia que tiene sobre los derechos fundamentales y los derechos de la personalidad⁷. Por tanto, a pesar de tratarse de una materia de competencia exclusiva de los legisladores nacionales, puede incidir en el Derecho de la Unión por su interés sobre la ciudadanía comunitaria⁸

La tendencia europea supone la promoción de la libertad de los progenitores a elegir los apellidos de sus hijos y de la igualdad entre hombres y mujeres, sobretodo en el caso de las mujeres casadas que en muchos Estados pierden su apellido⁹.

El principio de igualdad entre ambos sexos está consagrado en las constituciones de todos los Estados Miembros de la Unión Europea, pero no se ha desarrollado en todos los ámbitos, es por eso que el ordenamiento comunitario insiste en la necesidad de que esa igualdad jurídica se vea reflejada en la realidad. La adquisición de la esposa del apellido de su marido o el sistema del apellido único es contrario a los principios de igualdad y no discriminación consagrados en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966, la Convención sobre la eliminación de

⁶ MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, J., “La falta de competencia de la UE para elaborar un código civil europeo: sobre los límites a la armonización en materia de Derecho civil”, en AA. VV., coord. Sergio Cámara Lapuente de la obra *Derecho Privado Europeo*, Colex, Madrid, 2003. Pg. 137.

⁷ EGUSQUIZA BALMASEDA, M., “Derecho al apellido: tradición, igualdad y ciudadanía europea”, *Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional* num.11/2005 parte Estudio. Editorial Aranzadi, S.A.U., Cizur Menor. 2005.

⁸ MAGALLÓN ELÓSEGUI, N. “La DGRN ante la jurisprudencia europea en materia de nombre y apellidos”, *Revista Española de Derecho Internacional*, Madrid, 2010. Pg. 149.

⁹ FERNÁNDEZ PÉREZ, E.A, “El nombre y los apellidos...”, *op. cit.*, pg. 530.

toda forma de discriminación respecto a las mujeres de 1979, el Convenio Europeo y la Carta Europea de Derechos Fundamentales¹⁰.

A pesar de esto, se ha dado gran libertad al Derecho interno de cada Estado para regular el derecho a los apellidos, pero sin olvidar que la igualdad es un valor central y un derecho fundamental de los ciudadanos europeos¹¹.

Existen varios intentos legislativos del Consejo de Europa para orientar la normativa estatal de sus Estados miembros:

- La Resolución (78) 37 sobre la igualdad de los esposos en Derecho Civil, adoptada por el Comité de Ministros en 1978. Se recomienda la promoción de la igualdad entre cónyuges, entre otras, en materias como la imposición del apellido del marido. Se pedía que no se obligase de manera legal a cambiar a un cónyuge su apellido con el matrimonio, sugiriendo algunas posibilidades a tal efecto:

“6. Regular el apellido de los esposos de manera que se evite que uno de los cónyuges tenga que modificar su apellido para adoptar el del otro. A tal efecto, puede seguirse, por ejemplo, alguno de los siguientes sistemas:

- i) Elegir un apellido común en virtud de acuerdo entre los esposos, bien el apellido de uno de ellos, bien el apellido compuesto por la unión de los apellidos de ambos o bien un apellido diferente a los apellidos de los esposos.*
- ii) La conservación por cada uno de los esposos de su apellido de soltero.*
- iii) La formación de un apellido de familia establecido por la Ley a través de la unión de los apellidos de los esposos.*

7. Permitir, después de la disolución del matrimonio, que cada uno de los esposos conserve el apellido de familia, salvo que, en caso de divorcio, uno de los cónyuges haya obtenido en virtud de causa legal

¹⁰ LINACERO DE LA FUENTE. “El principio de igualdad en el orden de transmisión de los apellidos. El art. 49 de la nueva Ley del Registro Civil”, en *Actualidad Civil*. Nº 15-16. Septiembre 2012. Pgs. 1618-1619.

¹¹ FERNÁNDEZ PÉREZ, E.A, “El nombre y los apellidos...”, *op. cit.*, pg. 531.

justificada, autorización judicial obligando a su ex consorte a abandonar el apellido de familia”.

- La Recomendación N° R (85) 2 sobre la protección jurídica contra la discriminación por razón de sexo, del Comité de Ministros de los Estados Miembros en 1988. Se impone el deber de garantizar la igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres.
- La Declaración de igualdad entre hombres y mujeres adoptada por el Comité de Ministros en 1988. Instaba a renovar el compromiso para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres, al ser un pilar fundamental de los derechos humanos y de la democracia.
- El Convenio-marco para la protección de las minorías nacionales del Consejo de Europa de 1995 (N° 157), ratificado por España en 1998. Se menciona la protección del derecho de las minorías a utilizar su nombre y apellido en la lengua minoritaria y a su reconocimiento oficial.
- La Recomendación CM/R 17 del Comité de Ministros sobre igualdad de género de 2007. Se recomienda de nuevo a los Estados que actúen en cuanto a la igualdad de mujeres y hombres, sobre temas como:

“la adopción o el reforzamiento de las previsiones legales que aseguren a hombres y mujeres igualdad de derechos y responsabilidades en relación con el matrimonio, vida familiar y disolución del matrimonio, y el mismo derecho a elegir su propio apellido familiar, así como su propia ocupación profesional, conforme a los instrumentos ratificados por los Estados miembros”.

De manera que son múltiples las recomendaciones elaboradas para evitar esta discriminación, tanto a nivel general como a la hora de transmitir los apellidos a los hijos. Se insiste en las distintas disposiciones en la necesidad de que esa igualdad jurídica se haga realidad¹².

Pero hay que tener en cuenta que en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no se contiene ninguna mención sobre el nombre o los apellidos para determinar si se trata de una competencia exclusiva de los Estados Miembros o una

¹² LINACERO DE LA FUENTE. M., *“El nombre y los apellidos”*, Editorial Tecnos, Madrid, 1992. Pg. 133.

competencia compartida con la Unión. Sin embargo, en su artículo 8 establece que “*en todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad*”¹³.

¹³ FERNÁNDEZ PÉREZ, E.A, “*El nombre y los apellidos...*”, *op. cit.*, pg. 536.

II. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS APELLIDOS EN EL DERECHO ESPAÑOL

1. El origen de los apellidos en el ordenamiento jurídico español

La utilización de un signo identificativo para cada individuo es habitual en cualquier época histórica, la forma del mismo varía, sin embargo, en función del momento en el que nos encontremos.

En España, como indica *BATLLE*, influyó el cristianismo por la importancia del nombre impuesto en el bautismo¹⁴. Con el tiempo comenzó a añadirse un segundo apellido que ayudaba a identificar a las personas, pues solía ser el nombre del progenitor, un apodo que hacía referencia a cualidades de la persona, a su oficio o profesión, o al lugar geográfico de procedencia¹⁵. Generalmente este segundo elemento diferenciador hacía referencia al nombre del padre, muchas veces añadiendo sufijos castellanos, como “Sancho, Sánchez”, o “Gonzalo, González”. Solían hacer referencia a una cualidad física, como “Calvo, Delgado, Moreno, Viejo”, o a una cualidad moral de la persona, como “Bueno, Bravo, Valiente”. También hacían referencia al oficio, como “Carpintero, Sastre, Herrero”, o al lugar geográfico de procedencia, como “Del Río, Navarro, Catalán”.

Por ello, el nombre y los apellidos se configuran como un elemento de identidad de toda persona, que se establece en el momento de la inscripción de su nacimiento y deriva del derecho de la personalidad¹⁶.

2. Evolución legislativa de la transmisión de los apellidos

Los apellidos, tal y como se conciben hoy en día, son producto de una larga evolución.

2.1 Etapa preconstitucional

Comenzaron a utilizarse como una práctica generalizada, pues durante muchos siglos el régimen jurídico del nombre de las personas estuvo relegado al derecho

¹⁴ BATLLE. “El derecho al nombre”, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, nº 159. Año LXXX. Septiembre de 1931. Pg. 262.

¹⁵ LINACERO DE LA FUENTE, M. “El principio de igualdad en el orden de transmisión de los apellidos. El art. 49 de la nueva Ley del Registro Civil”, *Diario La Ley*, Nº 15-16, Septiembre 2012, pg. 1611, tomo 2, Editorial LA LEY (LA LEY 7823/2012).

¹⁶ LÓPEZ JARA, M. “El orden de los apellidos en los supuestos de filiación determinada judicialmente. El superior interés del menor”, *LA LEY Derecho de Familia*, Nº 9, Primer trimestre 2016, Editorial Wolters Kluwer (LA LEY 46/2016).

consuetudinario¹⁷. A finales del siglo XV el Cardenal Cisneros estableció la obligación de anotar en los registros de las parroquias los nombres y apellidos de los bautizados, junto con los de sus padres y abuelos¹⁸. No existía un criterio uniforme, y el uso de los apellidos de los progenitores no se generalizó en la sociedad hasta que en el siglo XVII con la burocracia de los Borbones se instaura la obligación de usar el primer apellido del padre y el segundo el de la madre¹⁹. Así, en 1870 se creó el Registro Civil con la Ley Provisional de Registro Civil, de 2 de julio de 1870, y su Reglamento, de 13 de diciembre de 1870, que fueron las primeras normas jurídicas proclamadas en toda la historia de nuestro país en materia de nombre y apellidos. Su régimen de atribución se consagró en la Ley de Registro Civil de 1957 y en el Reglamento del Registro Civil de 1958, así como en el Código Civil.

En su primera consagración en el Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, se diferenciaba entre hijos legítimos e hijos ilegítimos. El originario artículo 114 del Código Civil establecía que los hijos legítimos tenían derecho “*a llevar los apellidos del padre y de la madre*”; el apellido paterno precedía al materno en todo caso, siendo imposible alterar dicho orden. Los hijos ilegítimos, por su parte, carecían de derecho a llevar el apellido de sus progenitores, pues el legislador pretendía sancionar así la procreación extramatrimonial. En estos casos, el artículo 55.2 de la Ley del Registro Civil de 1957 indicaba que: “*El encargado impondrá un nombre y unos apellidos de uso corriente al nacido cuya filiación no pueda determinar*”.

2.2 La Constitución de 1978 como punto de inflexión

El derecho al nombre se incluye dentro de diversos derechos y libertades especialmente protegidos de la Constitución de 1978 que han influido en la promulgación de diversas normas.

En el artículo 1.1 de la Constitución se habla de libertad e igualdad, lo que representaría la libertad por parte de los padres de elegir en situación de igualdad el nombre propio de su hijo. El artículo 3 de la Constitución habla de la protección que requiere la pluralidad lingüística, por lo que se acaba con la vieja imposición de nombres propios en otras lenguas distintas a la castellana. El artículo 9 de la

¹⁷ TORRELLES TORREA, E., “La elección del orden de los apellidos por parte de los progenitores y los criterios de determinación a falta de acuerdo de la Ley de Registro Civil de 2011”, *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, N.º 753, Enero 2016. Pg. 188.

¹⁸ FERNÁNDEZ PÉREZ, E.A., “El nombre y los apellidos...”, *op. cit.*, pg.121.

¹⁹ TORRELLES TORREA, E., “La elección del orden de los apellidos...” *op. cit.*, pg. 189.

Constitución deja clara la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos, lo que puede entenderse de tal manera que estos no deberán inmiscuirse en el nombre propio que cada persona decida poner a su hijo. El artículo 10 de la Constitución se refiere al libre desarrollo de la personalidad, como uno de los fundamentos de nuestro orden político y de la paz social, y la doctrina reconoce el derecho al nombre como un derecho de la personalidad. El artículo 14 de la Constitución consolida la igualdad de todos ante la ley, sin que quepa discriminación, y podemos entender como una posible discriminación la inferencia de los poderes públicos en el ámbito de los nombres propios. El artículo 16.1 de la Constitución establece la libertad ideológica y religiosa de todas las personas, y la elección de un nombre propio es una manifestación de estas libertades. En el artículo 18.1 de la Constitución se garantiza el derecho fundamental a la propia imagen, donde se incluiría el derecho al nombre como un derecho de la persona. Finalmente, en los artículos 32.1 y 39.2 de la Constitución se proclaman valores como la igualdad jurídica del hombre y la mujer y la protección de los hijos por parte de los poderes públicos, que se consideran completamente iguales con independencia de su filiación, y con independencia del estado civil de sus progenitores.

Con todos estos preceptos queda claro que la elección de un nombre propio forma parte de los derechos íntimos de una persona, es decir, los derechos de la personalidad, y será inadmisibles cualquier intromisión por parte de los poderes públicos²⁰.

Además, la promulgación de la Constitución en 1978 obliga a efectuar una serie de reformas en la legislación a fin de adaptarla al texto constitucional, cuyo artículo 14 reconocía los principios de igualdad y no discriminación por razón del sexo y la filiación y mitigar poco a poco la primacía del hombre, pues era el apellido paterno el que se establecía en primer lugar, dejando siempre el apellido materno en un segundo plano²¹.

2.3 La ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación del Código Civil

La primera reforma que propuso una mayor igualdad en relación a los apellidos se llevó a cabo con la Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio. Con esta ley se simplificaba el sistema de atribución de los apellidos, pues se permite la inversión del

²⁰ FERNÁNDEZ PÉREZ, E.A., “El nombre y los apellidos...”, *op. cit.*, pg. 222.

²¹ LINACERO DE LA FUENTE, M. “El principio...”, *op. cit.*, pg. 1611.

orden de los apellidos a petición del interesado, aunque parece que no se acababa con las distinciones discriminatorias sobre los hijos matrimoniales o extramatrimoniales, ya que el artículo 5 del Código Civil seguía afirmando “*La filiación legítima o natural determina los apellidos*”.

Sí se logra un paso más hacia la igualdad, pues con la nueva redacción del artículo 109 del Código Civil se permite, por primera vez, que el hijo, al alcanzar la mayoría de edad, pueda solicitar que se altere el orden de los apellidos. Ahora bien, se trataba de un cambio *a posteriori*, es decir, en principio el orden consagrado legalmente seguía siendo el criterio tradicional²².

2.4 Modificación del Reglamento del Registro Civil de 1986

En 1986 se modifica el Reglamento del Registro Civil a través del Real Decreto 1917/1986, de 28 de agosto, derogando el artículo 57.3 de la Ley 17/1957 del Registro Civil. Este artículo mantenía la llamada infungibilidad de líneas, que exigía que el apellido propuesto perteneciera a la línea, ya sea paterna o materna, del apellido que se tratara de modificar. Así se impedía tanto la unión de los apellidos paterno y materno como primer o segundo apellido, como la inversión del apellido del padre por el de la madre. Lo que quiere decir que, por ejemplo, si el primer apellido del padre es VEGA y el segundo apellido es FERNÁNDEZ, y el primer apellido de la madre es PAZ y el segundo apellido es DELGADO, el hijo no podría solicitar como primer apellido un apellido compuesto por VEGA-PAZ, pues se estarían mezclando ambas líneas. Tras esta reforma, la única exigencia que se mantiene es: “*que los dos apellidos que resulten después del cambio no provengan de la misma línea*”.

2.5 La ley 40/1999, de 5 de noviembre, por la que se regulan los nombres y apellidos y el orden de los mismos

El siguiente logro legislativo hacía la igualdad se produce con la Ley 40/1999, de 5 de noviembre, por la que se regulan los nombres y apellidos y el orden de los mismos. En su Exposición de Motivos se dejaba clara la pretensión de un trato más justo y menos discriminatorio para la mujer.

Con esta ley se modificaba el artículo 109 del Código Civil, que queda redactado como sigue (dicha redacción se mantiene hoy vigente):

²² PAZ SÁNCHEZ GONZÁLEZ, M., “El orden originario de los apellidos”, *Revista jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres*, N° 9, 2002. Pg. 12.

“La filiación determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto en la ley. Si la filiación está determinada por ambas líneas, el padre y la madre de común acuerdo podrán decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes de la inscripción registral. Si no se ejercita esta opción, regirá lo dispuesto en la ley.

El orden de apellidos inscrito para el mayor de los hijos regirá en las inscripciones de nacimiento posteriores de sus hermanos del mismo vínculo.

El hijo, al alcanzar la mayor edad, podrá solicitar que se altere el orden de los apellidos”²³.

Como vemos, con esta reforma se permite que ambos progenitores decidan de común acuerdo el orden de transmisión de sus apellidos: si así lo acuerdan los progenitores, podrán establecer como primer apellido del hijo el primero de la madre, y como segundo apellido, el primero del padre. Ahora bien, en el caso de que no exista acuerdo entre ellos, rige lo dispuesto en la ley, esto es, lo previsto en la legislación registral civil. La legislación registral vigente en ese momento otorgaba preferencia al apellido paterno (artículo 53 de la Ley del Registro Civil de 1957 y artículo 194 del Reglamento del Registro Civil de 1958)²⁴. No había, por consiguiente, una equiparación entre el hombre y la mujer.

Se contemplaban las siguientes reglas en función del tipo de filiación que la filiación que se tratase:

- Cuando la filiación era matrimonial, operaba la presunción de paternidad del artículo 116 del Código Civil²⁵, por lo que, resultaba aplicable el criterio del artículo 194 del Reglamento del Registro Civil de 1958, configurándose como

²³ Artículo 109 redactado por el artículo 1 de la Ley 40/1999, 5 noviembre, sobre nombre y apellidos y orden de los mismos. Vigencia: 6 febrero 2000.

²⁴ Artículo 53 de la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil: “Las personas son designadas por su nombre y apellidos, correspondientes a ambos progenitores, que la Ley ampara frente a todos”.

Decreto de 14 de noviembre de 1958, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Registro Civil, artículo 194: “Si la filiación está determinada por ambas líneas y a salvo la opción prevista en el artículo 109 del Código Civil, primer apellido de un español es el primero del padre y segundo apellido el primero de los personales de la madre, aunque sea extranjera”.

²⁵ Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio, artículo 116: “Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución o a la separación legal o de hecho de los cónyuges”.

primer apellido el primero del padre, y como segundo apellido el primero de la madre²⁶.

- Si la filiación era extramatrimonial:
 - Si sólo estaba determinada la filiación en una línea, esta era la que determinaba los apellidos del hijo, pudiendo elegir el progenitor el orden de los mismos (artículo 55.2 del Reglamento del Registro Civil de 1958).
 - En el caso de que estuvieran determinadas ambas líneas de la filiación, los dos progenitores de común acuerdo podían decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, siempre que lo hicieran antes de la inscripción registral del nacido, conforme al artículo 109.2 del Código Civil.
 - En caso de que solo constase una de las líneas, y con posterioridad a la inscripción se reconociera la paternidad o maternidad, no se establecía una prioridad temporal de sus apellidos. Se podía, por tanto, atribuir al hijo el primer apellido de la filiación determinada con posterioridad, siempre que se rectificara registralmente²⁷.
- En el caso de que la filiación no estuviera determinada, resultaba aplicable lo previsto en el artículo 55.4 de la Ley del Registro Civil de 1958: *“El encargado del Registro impondrá un nombre y unos apellidos de uso corriente al nacido cuya filiación no pueda determinarlos.”* Tal precepto se completaba con el artículo 196 del Reglamento del Registro Civil, que determinaba: *“No puede imponerse de oficio como apellido el de Expósito u otro indicador de origen desconocido, ni nombre propio.”* Tales apellidos impuestos de oficio perderían su vigencia en el momento en que se estableciera una filiación²⁸.

Por otro lado, el apartado 3º del artículo 109 del Código Civil limita la posibilidad de decidir, pues el orden de los apellidos que los progenitores consensuen para el primero de los hijos rige en las posteriores inscripciones de nacimiento del resto de los hijos del mismo vínculo. Por lo tanto, los progenitores solo pueden alterar el orden de los apellidos de su descendencia en una única ocasión, y es con la inscripción del

²⁶ VERDERA SERVER, R., “Comentario al artículo 109 del Código Civil”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (director), *Comentarios al Código Civil*, Tirant lo Blanch, 2013, Valencia, pg. 1136.

²⁷ VERDERA SERVER, R., “Comentario al artículo 109...”, *op., cit.*, pg. 1138.

²⁸ VERDERA SERVER, R., “Comentario al artículo 109...”, *op., cit.*, pg. 1139.

nacimiento del primero de sus hijos²⁹. Esta facultad se reconoce únicamente a los progenitores del nacido, y no a los tutores legales.

Dicha posibilidad de elección se limita al orden de transmisión del primer apellido de cada progenitor, no les permite alterar el criterio legal y transmitir su segundo apellido en vez del primero; y debe ejercitarse antes de la inscripción del nacimiento, y no con posterioridad³⁰.

El apartado 4º del artículo 109 del Código Civil, por su parte, sigue reconociendo la posibilidad de que el hijo altere el orden de sus apellidos cuando alcance la mayoría de edad. Podrá solicitarlo mediante una simple declaración ante el encargado del Registro Civil, que surtirá efectos desde su misma inscripción (artículo 198 Reglamento del Registro Civil)³¹. Tal facultad puede ejercitarse sólo una vez, de manera que, una vez ejercitado, este derecho queda agotado. Además, se configura como una facultad personalísima del hijo; no puede, por consiguiente, ser ejercitada por su representante legal³².

En este sentido, el RDGRN de 20 de mayo de 1993 [RJ 1993/5067], respecto del actual artículo 109.4 del Código Civil, señaló:

“Este precepto postconstitucional, de cuya conformidad con los principios constitucionales y con los Convenios internacionales que ligan en España no es posible dudar, establece claramente un derecho personalísimo de los hijos para invertir sus apellidos por virtud de su sola declaración de voluntad que únicamente puede ejercitarse por los mismos a partir de la mayoría de edad y que, por consiguiente, no puede ser ejercitado antes en su nombre por los representantes legales de los menores de edad”.

Hay que tener en cuenta que el cambio de los apellidos de un mayor de edad puede alcanzar a los sujetos a la patria potestad, así como a los descendientes que expresamente lo consientan (artículo 61 Ley del Registro Civil de 1957)³³. Es por esto

²⁹ LINACERO DE LA FUENTE, M. “El principio...”, *op., cit.*, pg. 1611.

³⁰ VERDERA SERVER, R., “Comentario al artículo 109...”, *op., cit.*, pg. 1136.

³¹ QUICIOS MOLINA, S., “Comentario al artículo 109 del Código Civil”, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coordinador), *Comentarios al Código Civil*, Aranzadi, 2001, Navarra. Pg. 221.

³² VERDERA SERVER, R., “Comentario al artículo 109...”, *op., cit.*, pg. 1140.

³³ Artículo 61 de la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil: “El cambio gubernativo de apellidos alcanza a los sujetos a la patria potestad y también a los demás descendientes que expresamente lo consientan”.

que, respetando el derecho a la propia identidad de los hijos, se requiere la inscripción de su consentimiento siempre que decidan mantener en concordancia el orden de sus apellidos cuando sus progenitores mayores de edad alteren el orden de los mismos³⁴.

También se contemplan en la Ley del Registro Civil de 1957 distintos supuestos de transitoriedad para los casos en que ya hubiese hijos inscritos en el Registro Civil antes de su entrada en vigor. De acuerdo con su Disposición Transitoria Única:

“Si en el momento de entrar en vigor esta Ley los padres tuvieran hijos menores de edad de un mismo vínculo podrán, de común acuerdo, decidir la anteposición del apellido materno para todos los hermanos. Ahora bien, si éstos tuvieran suficiente juicio, la alteración del orden de los apellidos de los menores de edad requerirá aprobación en expediente registral, en el que éstos habrán de ser oídos conforme al artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero”.

En estos casos, no sería suficiente con la declaración de voluntad ante el encargado del Registro Civil, sino que se exigiría la tramitación de un expediente de cambio de apellidos³⁵.

2.6 La Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio

Con la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, se da un gran paso hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Esta ley, además de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, modificó el artículo 53 de la Ley del Registro Civil de 1957, dotándole de la siguiente redacción: *“Las personas son designadas por su nombre y apellidos, correspondientes a ambos progenitores, que la Ley ampara frente a todos”.*

³⁴ VERDERA SERVER, R., “Comentario al artículo 109...”, *op. cit.*, pg. 1142.

³⁵ Artículo 365 el Reglamento para la aplicación de la Ley del Registro Civil: *“Los expedientes de nacionalidad que sean de la competencia del Ministerio, los de cambio o conservación de nombre y apellidos y los de dispensa para matrimonio serán instruidos, conforme a las reglas generales, por el Encargado del Registro Municipal del domicilio de cualquiera de los promotores. Si todos los peticionarios estuvieran domiciliados en país extranjero se instruirán por el Cónsul del domicilio de cualquiera de ellos o, en su defecto, por el Encargado del Central. Resueltos por el Encargado los de su competencia, los demás se elevarán directamente a la Dirección, que podrá ordenar su ampliación con nuevas diligencias y, en este caso, se oirá nuevamente al Ministerio Fiscal. Los de nacionalidad, cuya resolución corresponda al Gobierno, serán instruidos por la Dirección General, que podrá comisionar al efecto al Encargado del Registro del domicilio, sin que, en ningún caso, se requiera anuncios generales ni audiencia del Ministerio Fiscal”.*

Tras admitirse el matrimonio entre personas del mismo sexo, se modifica la Ley del Registro Civil de 1957 tratando de erradicar el calificativo paterno o materno de la filiación.

La Ley 13/2005 también modificó el artículo 48 de la Ley del Registro Civil de 1957, a fin de indicar que la filiación paterna o materna constará en el margen de la inscripción del nacimiento. Por lo que en la mayoría de los casos seguía habiendo apellido paterno y apellido materno³⁶.

2.7 La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil

Esta ley, tal y como se refiere a ella *CORERA IZU*, era muy necesaria a pesar de sus críticas. Se trata de una ley que responde a la nueva realidad política, social y tecnológica de España³⁷. Llama la atención su entrada en vigor, pues a pesar de tratarse de una ley del año 2011, una parte de la misma no entró en vigor hasta el año 2015, y otra parte se encuentra en *vacatio legis*, y no será hasta el 30 de junio de 2017 cuando comience a aplicarse. Este es el plazo que tiene el Gobierno para adoptar las medidas y cambios normativos necesarios sobre la organización y funcionamiento de los Registros Civiles³⁸. Aunque es posible que exista una nueva prórroga, por tanto, hasta que no entre en vigor esta ley en su totalidad no se logrará cumplir con el principio de igualdad de sexos en materia de apellidos.

En su Preámbulo se indica que su adopción era necesaria por la importancia del Registro Civil, siendo necesario un nuevo modelo que se ajuste a la realidad actual del país, así como a los valores consagrados en la Constitución de 1978, que sitúa a las personas y a sus derechos dentro de la acción pública.

Esta ley modifica la concepción del Registro Civil desde varios aspectos. En primer lugar, diseña una base de datos única para toda España, lo que facilita la búsqueda de

³⁶ LASARTE, C. *Derecho de Familia. Principios de Derecho Civil VI*, Marcial Pons, 2011. Pg. 182.

³⁷ CORERA IZU, M. “El asiento del nacimiento en la nueva Ley del Registro Civil. La problemática de la filiación”, *Diario La Ley*, Nº 8686, Sección Tribuna, 21 de Enero de 2016, Ref. D-30, Editorial LA LEY (LA LEY 36/2016).

³⁸ Disposición final décima. Entrada en vigor: “*La presente Ley entrará en vigor el 30 de junio de 2017, excepto las disposiciones adicionales séptima y octava y las disposiciones finales tercera y sexta, que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado". Sin perjuicio de lo anterior, entrarán en vigor el 15 de octubre de 2015 los artículos de la presente Ley modificados por el artículo segundo de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. Hasta la completa entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno adoptará las medidas y los cambios normativos necesarios que afecten a la organización y funcionamiento de los Registros Civiles*”.

los mismos y permite optimizar las posibilidades de un registro informatizado con una herramienta común. Todo esto respetando los principios consagrados en la Constitución de 1978 de seguridad jurídica, de protección de la intimidad personal y familiar, y de eficiencia y coordinación administrativa³⁹.

Por otro lado, se pretende acabar con la antigua configuración del estado civil a partir del estado social, la religión, el sexo, la filiación o el matrimonio. Este nuevo Registro Civil tiene que ser coherente con la Constitución, asumiendo que las personas son iguales en dignidad y derechos, por lo que no se puede realizar una constatación territorial de los hechos concernientes a las personas.

Por ello, esta ley acaba con el tradicional sistema de división del Registro Civil en Secciones, dedicadas a los nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales. Se crea un registro individual, siendo el centro del mismo la persona, pues desde la primera inscripción de cada persona se asigna un código personal a la misma.

En relación con los apellidos, ya en la tramitación parlamentaria del artículo 49 de la Ley 20/2011, de 21 de Julio, del Registro Civil, en el Informe del Consejo del Poder Judicial al Anteproyecto de Ley del Registro Civil (objeción 48 del artículo 53 del Anteproyecto. *Cambio de los apellidos mediante declaración de voluntad*), se planteó la necesidad de una regla supletoria para aquellos supuestos en los que los padres no se ponían de acuerdo a la hora de determinar el orden de los apellidos de sus hijos, pues desde el Ministerio de Justicia se entendía que el criterio supletorio del apellido paterno en primera posición podría ser inconstitucional.

Según este informe, se planteaba la posibilidad de que se atribuyera en primer lugar aquel de los dos apellidos que fuera menos frecuente, que se determinara el orden de los mismos por mero orden alfabético, el sorteo o la aleatoriedad, otorgar primero el apellido del progenitor de mayor edad o aquel que tuviera mayor riesgo de desaparecer⁴⁰.

Finalmente, en el Proyecto de Ley se optó por el criterio del orden alfabético en su artículo 49.1.4º; pero se presentaron diversas enmiendas que pretendían soluciones distintas:

³⁹ CORERA IZU, M. “El asiento...”, *op., cit.* (LA LEY 36/2016).

⁴⁰ TORRELLES TORREA, E., “La elección del orden de los apellidos...”, *op., cit.*, pg. 197.

Enmienda 24, por Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds: procedimiento de azar; Enmienda 25, por Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds: mediante sorteo en la forma que reglamentariamente se determine; Enmienda 26, por Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds: utilizando un criterio de orden alfabético ascendente o descendente de manera alternativa, de forma que en una inscripción se priorice el apellido cuya letra inicial se sitúe antes en el alfabeto, y en la siguiente se priorice el apellido cuya letra inicial sea posterior; Enmienda 13, por Partido Nacionalista Vasco-Grupo Vasco: el apellido menos frecuente según los datos del INE; Enmienda 5, por Coalición Canaria: aleatoriamente por el procedimiento que reglamentariamente se determine; Enmienda 147, por G. Partido Popular: el orden de apellidos se determinará atendiendo al que pudiera tener más riesgo de desaparecer⁴¹.

Ante la imposibilidad de alcanzar un consenso sobre la solución que habría que adoptarse ante la falta de acuerdo de los progenitores, se aprobó finalmente dotar al artículo 49 de la siguiente redacción:

“Artículo 49. Contenido de la inscripción de nacimiento y atribución de apellidos.

1. En la inscripción de nacimiento constarán los datos de identidad del nacido consistentes en el nombre que se le impone y los apellidos que le correspondan según su filiación. Constarán asimismo el lugar, fecha y hora del nacimiento y el sexo del nacido.

2. La filiación determina los apellidos.

Si la filiación está determinada por ambas líneas, los progenitores acordarán el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes de la inscripción registral.

En caso de desacuerdo o cuando no se hayan hecho constar los apellidos en la solicitud de inscripción, el Encargado del Registro Civil requerirá a los progenitores, o a quienes ostenten la representación legal del menor, para que en el plazo máximo de tres días comuniquen el orden de apellidos. Transcurrido dicho

⁴¹ CORERA IZU, M. “El asiento...”, *op.*, cit. (LA LEY 36/2016).

plazo sin comunicación expresa, el Encargado acordará el orden de los apellidos atendiendo al interés superior del menor.

En los supuestos de nacimiento con una sola filiación reconocida, ésta determina los apellidos. El progenitor podrá determinar el orden de los apellidos.

El orden de los apellidos establecido para la primera inscripción de nacimiento determina el orden para la inscripción de los posteriores nacimientos con idéntica filiación. En esta primera inscripción, cuando así se solicite, podrán constar la preposición «de» y las conjunciones «y» o «i» entre los apellidos, en los términos previstos en el artículo 53 de la presente Ley.

3. También se incorporará a la inscripción el código personal asignado.

4. Constarán, además, y siempre que fuera posible, las siguientes circunstancias de los padres: nombre y apellidos, Documento nacional de identidad o Número de identificación de extranjero, lugar y fecha de nacimiento, estado, domicilio y nacionalidad, así como cualquier otro dato necesario para el cumplimiento del objeto del Registro Civil al que se refiere el artículo 2 de la presente Ley que se haya incluido en los modelos oficialmente aprobados.”

Como vemos, en la redacción definitiva se modifica el segundo apartado del artículo para armonizarlo con el artículo 109 del Código Civil. Se establece que es el primer apellido de los progenitores el que se transmite. La determinación del orden de los apellidos corresponde al consenso de los padres, y con esto también se pretende fomentar el acuerdo y la tolerancia entre ellos. Además, será el encargado del Registro Civil, atendiendo al interés superior del menor, el que decidirá el orden de los mismos, transcurridos tres días y en caso de desacuerdo o silencio de los progenitores, suprimiendo así el criterio de transmisión por orden alfabético que se planteó inicialmente, y respetando así el artículo 14 de la Constitución, la igualdad de hombres y mujeres.

Para un sector de la doctrina no es conveniente que el Juez sea quien tenga que decidir⁴², pues se alargaría la inscripción del nacido, y durante ese tiempo el mismo no

⁴² DE RAMÓN FORNS, I., “Orden de los apellidos y discriminación”, *Diario La Ley*, N° 7233, Sección Doctrina, Septiembre 2009, Ref. D-273, Editorial LA LEY (LA LEY 13580/2009).

tendría un nombre determinado, además, se vería vulnerado el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño⁴³.

2.7.1 Referencia al interés superior del menor

Como hemos indicado, en los supuestos en los que no existe acuerdo entre los progenitores para establecer el orden de transmisión de sus respectivos primeros apellidos, será en encargado del Registro Civil el que, atendiendo el interés superior del menor, decidirá el orden de los mismos.

Cuando hablamos del derecho al nombre, estamos hablando de un derecho de la personalidad del hijo, no de un derecho de sus padres a que el hijo lleve como primer apellido alguno de los suyos, por lo que habrá que atender al interés superior del menor. Mas, determinar cuál es el interés superior del menor a estos efectos no parece una tarea fácil, este interés superior del menor supone un concepto jurídico indeterminado por el que la ley se refiere a unos límites imprecisos⁴⁴. ¿Cómo debemos interpretar el interés del menor aquí?

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3.1 del Código Civil:

“Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el texto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”.

Sobre esta base, el encargado del Registro Civil deberá tener en cuenta elementos lógicos, sistemáticos y sociológicos, es decir, el sentido y finalidad de la norma, el contexto y la realidad social del tiempo en que ha de aplicarse la misma⁴⁵.

Conforme al elemento sistemático, estas normas han de ser interpretadas teniendo en cuenta la obligación constitucional de los poderes públicos de asegurar la protección de la familia, especialmente de los menores.

⁴³ Artículo 7.1 de la Declaración de los Derechos del Niño: “1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”.

⁴⁴ RIVERO HERNÁNDEZ, F., “El interés del menor”, 2.ª ed., Dykinson, Madrid, 2007. Pg. 71.

⁴⁵ LÓPEZ JARA, M. “El orden de los apellidos en los supuestos de filiación determinada judicialmente. El superior interés del menor”, *LA LEY Derecho de Familia*, Nº 9, Primer trimestre 2016, Editorial Wolters Kluwer (LA LEY 46/2016).

El juez deberá determinar, en primer lugar, cuál es el interés del menor que se ve afectado, y, en segundo lugar, qué solución lo satisface mejor. Esta cuestión causa problemas, pues el interés superior del menor aparece como un concepto jurídico indeterminado, y habrá que observar caso por caso⁴⁶.

Este principio se consagra como base en toda la legislación sobre menores, como puede verse en textos internacionales, preceptos del Código Civil, Derecho comparado o leyes autonómicas sobre atención a la infancia, y también se ve reflejado en la jurisprudencia⁴⁷.

En la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, se intentan establecer una serie de criterios generales en su artículo 2.2, que deberán ser tenidos en cuenta en busca del interés superior del menor en cada caso, sin perjuicio de los criterios que establezca la legislación específica aplicable⁴⁸. Estos criterios se ponderarán, según el apartado 3 del mismo artículo, teniendo en cuenta ciertos elementos generales, entre los que destacan en relación a este tema: la edad y madurez del menor; la necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover la efectiva integración y desarrollo del menor en la sociedad, así como de minimizar los riesgos que cualquier cambio de situación material o emocional pueda ocasionar en su personalidad y desarrollo futuro; aquellos otros elementos de ponderación que, en el supuesto concreto, sean considerados pertinentes y respeten los derechos de los menores. Estos elementos deberán ser valorados conjuntamente, conforme a los

⁴⁶ LÓPEZ JARA, M. “El orden...”, *op.*, *cit.* (LA LEY 46/2016).

⁴⁷ GALLARDO RODRÍGUEZ, A., “La novedad legislativa española en el orden de los apellidos de los hijos: un ejemplo a seguir por el resto de países europeos” *Revista General de Derecho Público Comparado*, N° 10, Enero 2012.

⁴⁸ Artículo 2.2 de la LO 1/1996: “a) La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas. b) La consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior. c) La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia. Se priorizará la permanencia en su familia de origen y se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para el menor. En caso de acordarse una medida de protección, se priorizará el acogimiento familiar frente al residencial. Cuando el menor hubiera sido separado de su núcleo familiar, se valorarán las posibilidades y conveniencia de su retorno, teniendo en cuenta la evolución de la familia desde que se adoptó la medida protectora y primando siempre el interés y las necesidades del menor sobre las de la familia. d) La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual o idioma del menor, así como la no discriminación del mismo por éstas o cualesquiera otras condiciones, incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo armónico de su personalidad”.

principios de necesidad y proporcionalidad, de forma que la medida que se adopte en el interés superior del menor no restrinja o limite más derechos que los que ampara⁴⁹.

Por su parte, la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, ha introducido una serie de criterios para determinar el interés superior, basándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo. En su Exposición de Motivos se define el interés superior del menor en los siguientes términos:

“Este concepto se define desde un contenido triple. Por una parte, es un derecho sustantivo en el sentido de que el menor tiene derecho a que, cuando se adopte una medida que le concierna, sus mejores intereses hayan sido evaluados y, en el caso de que haya otros intereses en presencia, se hayan ponderado a la hora de llegar a una solución. Por otra, es un principio general de carácter interpretativo, de manera que si una disposición jurídica puede ser interpretada en más de una forma se debe optar por la interpretación que mejor responda a los intereses del menor. Pero además, en último lugar, este principio es una norma de procedimiento. En estas tres dimensiones, el interés superior del menor tiene una misma finalidad: asegurar el respeto completo y efectivo de todos los derechos del menor, así como su desarrollo integral”.

En este marco normativo, consideramos que el interés superior del menor queda difícilmente determinado; estamos ante una cuestión que ha de ser analizada en cada supuesto en concreto, por lo que el problema se trasladada finalmente al Encargado del Registro Civil, quien podrá decidir atendiendo a diferentes criterios en función de lo que considere que es mejor para el menor. Todo esto con la finalidad de lograr una mayor equiparación de hombres y mujeres a la hora de transmitir los apellidos a sus hijos.

3. Cambio de los apellidos en los supuestos de violencia de género

Nuestro Ordenamiento contempla un supuesto excepcional en que se permite tanto a aquellas personas que han sido víctimas de violencia de género, como a sus hijos, cambiar sus apellidos como complemento de una posible orden judicial de alejamiento, a fin de impedir al agresor localizar a sus víctimas.

⁴⁹ ORDÁS ALONSO, M. “Imposición al menor del apellido paterno: igualdad, derecho a la propia imagen, interés del menor” *Derecho Privado y Constitución*, Nº 28, enero-diciembre 2014. Pg. 85.

A estos efectos, debemos señalar que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género reformó el artículo 58 de la Ley del Registro Civil, al establecer en su Disposición Adicional Vigésima que:

“El artículo 58 de la Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957, queda redactado de la siguiente forma:

2. Cuando se den circunstancias excepcionales, y a pesar de faltar los requisitos que señala dicho artículo, podrá accederse al cambio por Real Decreto a propuesta del Ministerio de Justicia, con audiencia del Consejo de Estado. En caso de que el solicitante de la autorización del cambio de sus apellidos sea objeto de violencia de género y en cualquier otro supuesto en que la urgencia de la situación así lo requiriera podrá accederse al cambio por Orden del Ministerio de Justicia, en los términos fijados por el Reglamento.”

El Real Decreto 170/2007, de 9 de febrero, de modificación del Reglamento del Registro Civil, por su parte, modificó los artículos 21, 22 y 28 del mismo para proteger a las víctimas de violencia de género. Con esta reforma se pretendía agilizar el procedimiento de cambio de apellidos, simplificando los trámites para proteger a las víctimas de modo urgente⁵⁰.

La medida es excepcional, consiste en el cambio de apellidos de las mujeres maltratadas, así como de los hijos que se encuentran bajo su custodia, siempre que ambos estén bajo peligro de amenaza.

Además, deben haber obtenido una medida cautelar de protección judicial. Al tratarse de un supuesto excepcional, no se exige que cumplan con los requisitos del artículo 57 de la Ley del Registro Civil⁵¹.

⁵⁰ MARTÍNEZ LÓPEZ-PUIGCERVER, A. “La mujer y sus apellidos: de la alegría de transmitirlos (Ley 40/1999), a la tristeza del cambio y pérdida de los apellidos de la mujer víctima de la violencia de un hombre (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre)”, Diario La Ley, 2008. (LA LEY 17094/2008)

⁵¹ Artículo 57 del Reglamento para la aplicación de la Ley del Registro Civil: “*El Ministerio de Justicia puede autorizar cambios de nombres y apellidos, previo expediente instruido en forma reglamentaria. Son requisitos necesarios de la petición de cambio de apellidos: 1. ° Que el apellido en la forma propuesta constituya una situación de hecho no creada por el interesado. 2. ° Que el apellido o apellidos que se tratan de unir o modificar pertenezcan legítimamente al peticionario. 3. ° Que provenga de la línea correspondiente al apellido que se trata de alterar.*”

Podrá formularse oposición fundada únicamente en el incumplimiento de los requisitos exigidos.

En estos casos es importante la falta de publicidad de los trámites, pues estas víctimas están en peligro, y para evitar que sean localizadas por sus agresores los cambios de apellidos se incluyen en los supuestos de publicidad restringida⁵².

Con relación a esto, surge un problema con las víctimas de violencia de género extranjeras que deseen cambiar sus apellidos, pues el régimen del nombre y apellidos se rige por la ley personal, y tal y como recalcó la Dirección General de los Registros y del Notariado en la Resolución de 7 de abril de 2001: “*Los órganos registrales españoles carecen de competencia para cambiar el nombre propio (o los apellidos) de ciudadanos extranjeros*”. En consecuencia, solo sería posible adoptar esta medida en relación a las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género que hayan adquirido la nacionalidad española, pues se practicará su inscripción de nacimiento conforme a la legislación española, y no supondría ningún problema⁵³.

Además, con la actual Ley del Registro Civil, la Ley 20/2011 de 21 de julio, se permite que las víctimas de violencia de género o sus descendientes, siempre que hayan vivido en hogares donde se haya sufrido esta situación, puedan optar al cambio de apellidos por Orden del Ministerio de Justicia, así reconoce esta posibilidad el artículo 55.

Otro supuesto relacionado es el que prevé el artículo 111 del Código Civil⁵⁴, pues a pesar de la taxatividad del artículo 109 del Código Civil, en este artículo se prevé una excepción, en la cual se podrá solicitar que el hijo no ostente el apellido del progenitor, para los casos en los que el progenitor haya sido condenado a causa de las relaciones a que obedezca la generación o cuando la filiación haya sido determinada judicialmente en contra de su oposición, siempre y cuando no decida mantener sus apellidos él mismo o su representante legal⁵⁵.

⁵² LÓPEZ JARA, M. “El orden...”, *op., cit.* (LA LEY 46/2016).

⁵³ LÓPEZ JARA, M. “El orden...”, *op., cit.* (LA LEY 46/2016).

⁵⁴ Artículo 111 del el Código Civil: “*Quedará excluido de la patria potestad y demás funciones tuitivas y no ostentará derechos por ministerio de la Ley respecto del hijo o de sus descendientes, o en sus herencias, el progenitor: 1. ° Cuando haya sido condenado a causa de las relaciones a que obedezca la generación, según sentencia penal firme. 2. ° Cuando la filiación haya sido judicialmente determinada contra su oposición. En ambos supuestos el hijo no ostentará el apellido del progenitor en cuestión más que si lo solicita él mismo o su representante legal. Dejarán de producir efecto estas restricciones por determinación del representante legal del hijo aprobada judicialmente, o por voluntad del propio hijo una vez alcanzada la plena capacidad. Quedarán siempre a salvo las obligaciones de velar por los hijos y prestarles alimentos.*”

⁵⁵ VERDERA SERVER, R., “Comentario al artículo 109...”, *op., cit.*, pg. 1138.

III. ESTUDIO COMPARADO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS APELLIDOS. ESPECIAL REFERENCIA A PORTUGAL, FRANCIA E ITALIA

A continuación, analizaremos la normativa referida a los apellidos en España y en otros países de nuestro entorno que cuentan con legislación codificada o *code law*, tales como Francia, Portugal o Italia, a fin de ofrecer un breve estudio comparado.

1. Portugal

1.1 Normativa

La normativa lusa en materia de apellidos se muestra menos tradicional que la de algunos países europeos. Se contiene en el *Código Civil* portugués, promulgado mediante Decreto Ley número 47344/1966, de 25 de noviembre, y se desarrolla en el *Código do Registro Civil*, aprobado por el Decreto Ley número 51/1978, de 30 de marzo⁵⁶.

En la regulación del apellido de los hijos el Código Civil en su artículo 1875, en relación al “*Nome do filho*”, estipula que el hijo podrá llevar el apellido del padre y de la madre, o solo el de uno de ellos, y la elección de su nombre y apellido corresponde a sus padres; a falta de acuerdo de los mismos, decidirá el Juez teniendo en cuenta los intereses del hijo. En el caso de que la maternidad o la paternidad se establezcan después de la inscripción del nacimiento del hijo en el registro, podrán modificarse estos apellidos⁵⁷.

Por su parte, el artículo 1876 del mismo cuerpo legal, en relación a la “*Asignación de los apellidos del marido de la madre*”, determina que, en los casos en los que la paternidad no esté determinada, se podrá asignar al hijo los apellidos del marido de la madre siempre que esta y su marido lo declaren ante el encargado del Registro Civil. Pero cuando el hijo alcance la mayoría de edad o la emancipación podrá requerir que se borren de su nombre los apellidos del marido de su madre⁵⁸. Cabe destacar que esta

⁵⁶ Dichas disposiciones pueden consultarse en <http://www.pgdlisboa.pt/home.php>

⁵⁷ Artigo 1875.º Código Civil.- (*Nome do filho*) “1. O filho usará apelidos do pai e da mãe ou só de um deles. 2. A escolha do nome próprio e dos apelidos do filho menor pertence aos pais; na falta de acordo, decidirá o juiz, de harmonia com o interesse do filho. 3. Se a maternidade ou paternidade forem estabelecidas posteriormente ao registo do nascimento, os apelidos do filho poderão ser alterados nos termos dos números anteriores”.

⁵⁸ Artigo 1876.º Código Civil - (*Atribuição dos apelidos do marido da mãe*) “1. Quando a paternidade se não encontre estabelecida, poderão ser atribuídos ao filho menor apelidos do marido da mãe se esta e o marido declararem, perante o funcionário do registo civil, ser essa a sua vontade. 2. Nos dois anos posteriores à maioridade ou à emancipação o filho pode requerer que sejam

posibilidad se reconoce en caso de falta de determinación de la paternidad, pero no en caso contrario, cuando es solo la filiación paterna la que está reconocida.

En conexión con el texto anterior, el *Código do Registro Civil* cuenta con algunas menciones en relación a la imposición de los apellidos. Así, el artículo 103 relativo a la “*Composição do nome*” establece que el nombre completo se compondrá como máximo de seis vocablos gramaticales, pudiendo imponerse hasta cuatro apellidos, que se podrán elegir entre cualquiera de los que los padres tuvieran derecho a usar, pudiendo, en su defecto, elegirse uno de los nombres por los que se conozcan. Si la filiación no está establecida, el declarante podrá elegir los apellidos del menor y, si no lo hace, se observará lo dispuesto en el artículo 108. Concluye diciendo que las dudas sobre la composición del nombre y apellidos serán resueltas por el Director General de los Registros y del Notariado, a través del Conservatorio de los Registros Centrales⁵⁹.

En relación a dicho artículo 108, el mismo regula la imposición del nombre al niño abandonado, es decir, al recién nacido o menor de 14 años cuyos padres se desconozcan⁶⁰; según este precepto, será el encargado del Registro Civil el que se ocupe de atribuirle un nombre; lo elegirá de entre los nombres y apellidos comunes, evitando denominaciones que recuerden su condición de abandonado, y se atenderá a las reglas del apartado 2 del artículo 103; el nombre, por tanto, estará compuesto por seis vocablos como máximo⁶¹.

eliminados do seu nome os apelidos do marido da mãe”.

⁵⁹ Artigo 103 Código de Registro Civil: “*Composição do nome. 1. O nome do registando é indicado pelo declarante ou, quando este o não faça, pelo funcionário perante quem foi apresentada a declaração. 2. O nome completo deve compor-se, no máximo, de seis vocábulos gramaticais, simples ou compostos, dos quais só dois podem corresponder ao nome próprio e quatro a apelidos, devendo observar-se, na sua composição, as regras seguintes: a) Os nomes próprios devem ser portugueses, de entre os constantes da onomástica nacional ou adaptados, gráfica e foneticamente, à língua portuguesa, não devendo suscitar dúvidas sobre o sexo do registando; b) São admitidos os nomes próprios estrangeiros sob a forma originária se o registando for estrangeiro, houver nascido no estrangeiro ou tiver outra nacionalidade além da portuguesa; c) São ainda admitidos os nomes próprios estrangeiros sob a forma originária se algum dos progenitores do registando for estrangeiro ou tiver outra nacionalidade além da portuguesa; d) A irmãos não pode ser dado o mesmo nome próprio, salvo se um deles for falecido; e) Os apelidos são escolhidos entre os que pertençam a ambos ou só a um dos pais do registando ou a cujo uso qualquer deles tenha direito, podendo, na sua falta, escolher-se um dos nomes por que sejam conhecidos; f) Se a filiação não ficar estabelecida, pode o declarante escolher os apelidos a atribuir ao registando e, se não o fizer, observa-se o disposto no artigo 108.º 3. (Revogado.) 4. As dúvidas sobre a composição do nome são esclarecidas por despacho do director-geral dos Registos e do Notariado, por intermédio da Conservatória dos Registos Centrais*”. Puede consultarse en <http://www.pgdlisboa.pt/home.php>

⁶⁰ FERNÁNDEZ PÉREZ, E.A., “*El nombre y los apellidos...*”, *op. cit.*, pg. 634.

⁶¹ Artigo 108 Código de Registro Civil: *Nome. 1. Compete ao conservador atribuir ao registando um nome completo, devendo escolhê-lo de preferência entre os nomes de uso vulgar ou derivá-lo de alguma característica particular ou do lugar em que foi encontrado, mas sempre de modo a evitar denominações equívocas ou capazes de recordarem a sua condição de abandonado e sem prejuízo do disposto no n.º 2*

Sin embargo, a pesar de que la mujer puede transmitir sus apellidos en las mismas condiciones que su marido sin que exista discriminación, hay que tener en cuenta que en Portugal los padres suelen reservar el segundo apellido de los hijos para el apellido paterno, que es el principal; se trata de un uso o tradición que no aparece en ningún precepto de la legislación portuguesa⁶². Así, por ejemplo, si una ciudadana portuguesa se llama *María Gomes Rodrigues*, siendo *Gomes* el apellido materno y *Rodrigues* el paterno, acabará siendo tratada como *Paula Rodrigues* de manera simplificada, pues esa es la tradición.

Por otro lado, tratando el apellido de la mujer casada, sorprende en el panorama actual que esta no pierda sus apellidos por razón del matrimonio. Así, el artículo 1677 del Código Civil luso determina:

“Derecho al nombre:

- 1. Cada uno de los cónyuges conserva sus propios apellidos, pudiendo aumentar estos apellidos con los del otro hasta un máximo de dos.*
- 2. La facultad conferida en la segunda parte del apartado anterior no podrá ser ejercida por el que conserve apellidos del cónyuge de su anterior matrimonio”.*

Este artículo se completa con los siguientes preceptos: El artículo 1677-A sobre “*Viudas y segundas nupcias*”, que permite que el cónyuge que hubiera añadido a sus apellidos los del otro cónyuge los mantenga en caso de viudez, y, si lo declaran hasta la celebración del nuevo matrimonio, incluso después de las segundas nupcias; el artículo 1677-B sobre “*Divorcio y separación judicial de personas y bienes*”, precepto que deja claro que, en caso de separación judicial, cada uno de los cónyuges conserva los apellidos que haya adoptado del otro, y, en caso de divorcio, el cónyuge podrá conservar los apellidos del otro siempre que este dé su consentimiento o el tribunal lo autorice, teniendo en cuenta los motivos invocados; y, finalmente, con el artículo 1677-C, relativo a la “*Privación judicial del uso del nombre*”, precepto según el cual, fallecido uno de los cónyuges o decretada la separación judicial de personas y bienes o el divorcio, el cónyuge que conserve los apellidos del otro puede ser privado por el

do artigo 103º .2. Na escolha do nome deve, todavia, respeitar-se qualquer indicação escrita encontrada em poder do abandonado, ou junto dele, ou por ele próprio fornecida”. Puede consultarse en <http://www.pgdlisboa.pt/home.php>

⁶² LINACERO DE LA FUENTE. “El principio de igualdad...”, *op., cit.*, pg. 1621.

tribunal del uso de los mismo cuando este uso le lesione gravemente los intereses morales propios o de su familia. Están legitimados para solicitar la privación del uso del nombre, en caso de separación judicial de personas y bienes o de divorcio, el otro cónyuge o ex cónyuge, y, en el caso de viudez, los descendientes, ascendientes y hermanos del cónyuge fallecido⁶³.

1.2 Estudio comparado

La regulación de los apellidos en Portugal puede parecer la más cercana a la normativa española. Hemos visto cómo en el Código Civil portugués, en su artículo 1875, se estipula que los padres tendrán que ponerse de acuerdo para determinar el apellido que llevará su hijo, que podrá ser el paterno o el materno. En el caso español, los padres también deberán ponerse de común acuerdo pero, como contamos con el sistema de doble apellido, deberán hacerlo sobre el orden de imposición, es decir, los padres deben decidir en qué orden los transmiten. A falta de acuerdo, en el caso portugués decidirá el juez teniendo en cuenta los intereses del hijo, mientras que en el caso de España es el Encargado del Registro Civil el que establece el orden en que se impondrán los apellidos, y lo hará teniendo en cuenta el interés del menor, con todos los problemas de interpretación que esto conlleva.

En los casos en los que la paternidad no esté determinada, el hijo nacido en Portugal podrá llevar los apellidos del marido de su madre, siempre que lo declare este ante el Encargado del Registro Civil, así reconoce esta posibilidad el artículo 1876 del Código

⁶³ Artigo 1677º: “(Direito ao nome). 1. Cada um dos cônjuges conserva os seus próprios apelidos, mas pode acrescentar-lhes apelidos do outro até ao máximo de dois. 2. A faculdade conferida na segunda parte do número anterior não pode ser exercida por aquele que conserve apelidos do cônjuge de anterior casamento”.

Artigo 1677º A: “(Viuvez e segundas núpcias). O cônjuge que tenha acrescentado ao seu nome apelidos do outro conserva-os em caso de viuvez e, se o declarar até à celebração do novo casamento, mesmo depois das segundas nupcias”.

Artigo 1677º B: “(Divórcio e separação judicial de pessoas e bens). 1. Decretada a separação judicial de pessoas e bens, cada um dos cônjuges conserva os apelidos do outro que tenha adoptado; no caso de divórcio, pode conservá-los se o ex-cônjuge der o seu consentimento ou o tribunal o autorizar, tendo em atenção os motivos invocados. 2. O consentimento do ex-cônjuge pode ser prestado por documento autêntico ou autenticado, termo lavrado em juízo ou declaração perante o funcionário do registo civil. 3. O pedido de autorização judicial do uso dos apelidos do ex-cônjuge pode ser deduzido no processo de divórcio ou em processo próprio, mesmo depois de o divórcio ter sido decretado”.

Artigo 1677º C: “(Privação judicial do uso do nome). 1. Falecido um dos cônjuges ou decretada a separação judicial de pessoas e bens ou o divórcio, o cônjuge que conserve apelidos do outro pode ser privado pelo tribunal do direito de os usar quando esse uso lese gravemente os interesses morais do outro cônjuge ou da sua família. 2. Têm legitimidade para o pedido de privação do uso do nome, no caso de separação judicial de pessoas e bens ou divórcio, o outro cônjuge ou ex-cônjuge, e, no caso de viuvez, os descendentes, ascendentes e irmãos do cônjuge falecido”. Código Civil. Puede consultarse en <http://www.pgdlisboa.pt/home.php>

Civil portugués. Por su parte, en la normativa española no existe ningún precepto que reconozca esta posibilidad, de manera que si solo está reconocida la filiación materna será esta la que determine los apellidos del hijo, pudiendo elegir el orden de los mimos, artículo 55.2 del Reglamento del Registro Civil⁶⁴.

El *Código do Registro Civil*, en su artículo 103, destaca la libertad existente en el régimen portugués sobre la imposición de los apellidos, pues estos pueden tener un origen variado, pueden adoptarse apellidos de ambas líneas, y no solo los apellidos que ostenten los padres, puede tratarse de cualquier apellido, pues el apellido de una persona podrá componerse de alguno de los apellidos de sus padres, abuelos o, incluso, de sus bis abuelos. Además, pueden determinarse hasta cuatro apellidos distintos. Mientras que en el Código Civil español no se reconocen tales libertades pues, tal y como consta en el artículo 109 del Código Civil, los apellidos se imponen por filiación, no se eligen, y serán únicamente dos los apellidos propios hijo, que serán los primeros de los de sus progenitores.

Por último, en relación al apellido de la mujer casada, tanto en la legislación lusa como en el sistema español, la mujer no pierde sus apellidos por razón del matrimonio, y se reconoce la posibilidad de transmitirlos a sus hijos en régimen de igualdad con el marido. La diferencia está en que, en el caso de España, ha habido un largo camino normativo hasta llegar a esta igualdad jurídica, mientras que en el caso de Portugal, a pesar de que se reconoce esta igualdad con anterioridad, es tradición que los portugueses solo usen su segundo apellido, el cual suele ser el del padre. Así las cosas, esta igualdad jurídica existente en el sistema portugués no se muestra tanto en la práctica.

2. Francia

2.1 Normativa

En Francia, se utiliza la expresión “*nombre de familia*” para referirse al apellido, el vocablo que se transmite de generación en generación y que identifica a cada grupo familiar⁶⁵.

⁶⁴ Distinto sería el supuesto en el que el marido de la madre adoptara al menor o lo reconociera como propio, en cuyo caso se establece una relación de filiación a todos los efectos, de este modo, la filiación adoptiva determinará los apellidos con arreglo al artículo 109 del Código Civil Español.

⁶⁵ FERNÁNDEZ PÉREZ, E.A, “*El nombre y los apellidos...*”, *op. cit.*, pg. 598.

Tradicionalmente en el régimen jurídico francés, como en el de otros países europeos, se seguía un sistema que consistía en tomar el apellido del padre y anteponerlo al nombre individual del hijo⁶⁶. Esta asignación única del apellido paterno no provenía de ningún texto legal, sino que era fruto de la costumbre; provenía de normas esencialmente consuetudinarias⁶⁷.

Fue con la Ley 85-1372, de 23 de diciembre de 1985, sobre la igualdad de los esposos en los regímenes matrimoniales y de los padres en la administración de los bienes de sus hijos menores, cuando se produjo el primer cambio sobre la prevalencia del apellido del padre. En materia de apellidos, el artículo 43 de esta ley establecía que cualquier mayor de edad podía añadir a su apellido, a título de uso, el apellido de uno de sus padres que no le hubiera sido transmitido. En relación a los menores de edad, este derecho se llevaría a cabo por el titular de su patria potestad⁶⁸. En la actual regulación francesa, el apellido “*a título de uso*” no debe ser el mismo que el apellido como tal, es decir, puede utilizarse un apellido para la vida cotidiana y otro para los actos relativos al estado civil⁶⁹.

Pero la primera regulación que alteró el criterio tradicional de prevalencia del apellido paterno fue la Ley 2002-304, de 4 de marzo de 2002, relativa al nombre de familia, que tuvo gran transcendencia:

- Modificó el artículo 57 del *Code Civil*, a fin de aclarar que el apellido del nacido lo elegirán ambos progenitores.
- Pretende sustituir la palabra “*patronyme*” y otros términos similares en Código Civil francés, por “*nom de famille*”, es decir, se quiere dejar atrás la referencia al apellido como algo paterno y pasar a utilizar la expresión “nombre de familia” o “apellido” para referirse al mismo.
- Trata de acabar con la distinción discriminatoria entre hijos legítimos o hijos naturales; no será hasta la *Ordonance* 2005-759 de 4 de julio de 2005, relativa a la filiación, sin embargo, cuando se logre la equiparación definitiva.

⁶⁶ BATTLE: “El derecho al nombre”, *RGLJ*, tomo 159, septiembre 1931, *Editorial Reus*, Madrid. Pg. 267.

⁶⁷ LINACERO DE LA FUENTE, M. “*El nombre...*”, *op. cit.*, pg. 122.

⁶⁸ Article 43. “*Toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en oeuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale*”. *Loi* 85-1372. Puede consultarse en <https://www.legifrance.gouv.fr/>

⁶⁹ FERNÁNDEZ PÉREZ, E.A, “*El nombre y los apellidos...*”, *op. cit.*, pg. 599.

- Se incorporan algunos artículos al *Code Civil*, añadiendo al Título VII, del Libro Primero, una Sección 5ª titulada “*De las reglas de transmisión del nombre de familia*” (actualmente es la Sección 4ª del *Code*), donde se estipulaba que los progenitores deben elegir el nombre de familia, ya sea el apellido del padre, el apellido de la madre o los dos apellidos unidos en el orden que los dos decidan. Cuando ambos padres, o uno de ellos, tengan un doble apellido, podrán, mediante una declaración escrita conjunta, transmitir sólo uno de ellos a sus hijos, de manera que solo se puede transmitir un apellido simple por progenitor. Además, en caso de que no haya acuerdo entre los progenitores, se establecía que primaría el apellido paterno.

La última modificación importante se ha llevado a cabo con la Ley 2013-404 de 17 de mayo de 2013, relativa al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Con esta ley se crearon y modificaron artículos en el *Code Civil*⁷⁰, entre los cuales destacan el artículo 225-1 que establece que cada cónyuge puede emplear, a título de uso, el apellido del otro cónyuge, sustituyéndolo o añadiéndolo a su propio apellido en el orden que elija⁷¹; así como el artículo 311-21 con el que se modificaba el criterio tradicional de primacía del apellido paterno al permitirse el matrimonio entre mujeres, pues a falta de acuerdo entre los progenitores sobre el apellido que transmitirán a sus hijos, se impondrán los apellidos unidos de ambos, por orden alfabético⁷².

⁷⁰ FERNÁNDEZ PÉREZ, E.A., “*El nombre y los apellidos...*”, *op. cit.*, pg. 601.

⁷¹ Article 225-1: “*Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit*”. *Code Civil*. Puede consultarse en <https://www.legifrance.gouv.fr/>

⁷² Article 311-21: “*Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu: soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants*”. *Code Civil*. Puede consultarse en <https://www.legifrance.gouv.fr/>

El régimen de los apellidos al hijo se encuentra regulado en el *Code Civil*, destacando la Sección 4ª anteriormente citada, del Capítulo I, Título VII, donde se encuentran los preceptos relativos a los mismos:

- El artículo 311-21, anteriormente mencionado, determina que cuando la filiación de un niño se haya establecido en relación a ambos padres simultáneamente, estos elegirán el apellido que le quieran transmitir, que podrá ser el del padre, el de la madre, o los de ambos unidos en el orden que ellos determinen, con el límite de un único apellido por cada uno. Si no consta una declaración conjunta para elegir dicho apellido, el Encargado del Registro Civil escogerá el apellido del padre respecto el cual se haya determinado primero la filiación, y el apellido del padre si la filiación se ha determinado simultáneamente. En caso de desacuerdo entre los progenitores, siempre que uno lo manifieste ante el Encargo del Registro Civil, durante la determinación simultánea de la filiación, el niño llevará el primer apellido de cada uno de ellos, que se unirá en orden alfabético. Además, en caso de nacimiento de un niño en el extranjero, siempre que por lo menos uno de los padres sea francés, y los progenitores no hayan podido ejercitar la opción de elegir el nombre en las condiciones anteriormente citadas, podrán hacerlo junto con la petición de transcripción del acta, a más tardar dentro de los tres años del nacimiento del niño. El apellido elegido se aplicará a los otros hijos comunes. Por último, cuando los padres o uno de ellos tengan un doble apellido, podrán, mediante declaración escrita conjunta, transmitir sólo un apellido a sus hijos.
- El artículo 311-22, por su parte, indica que lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará para los niños franceses⁷³.
- El artículo 311-23 establece que cuando se determina la filiación sólo respecto de uno de los padres, el niño lleva el nombre de ese padre. Pero, si se establece la segunda paternidad durante la minoría del niño, los padres pueden, mediante una declaración conjunta ante el Encargado del Registro Civil, optar por sustituir el apellido impuesto por el de ese segundo progenitor, o unir sus

⁷³ Article 311.22: “*Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui devient français en application des dispositions de l'article 22-1, dans les conditions fixées par un décret pris en Conseil d'Etat*”. *Code Civil*. Puede consultarse en <https://www.legifrance.gouv.fr/>

apellidos en el orden elegido por ellos, dentro del límite de un apellido por progenitor⁷⁴.

- Por último, el artículo 311-24 establece que la facultad de elección, referida a los apellidos, de los artículos 311-21 y 311-23 solo puede ejercerse una vez⁷⁵.

Por otro lado, en cuanto al apellido de la mujer casada, hasta la Ley 2013-404 de 17 de mayo, que autorizaba el matrimonio entre parejas del mismo sexo, era costumbre que esta usara el apellido de su esposo⁷⁶. Pero, como hemos comentado, esta ley introdujo el artículo 225-1 del *Code Civil*, que permitía a cada cónyuge llevar el apellido del otro a título de uso, sustituyéndolo o añadiéndolo al suyo propio, y en el orden que desearan. De manera que es a partir de esta ley cuando se acaba con esta costumbre, aunque el marido podía añadir a su apellido el de su mujer, como suele ser tradición en algunas regiones francesas⁷⁷.

El *Code Civil* regula las consecuencias respecto al apellido en los casos de divorcio o separación de cuerpos. Así, su artículo 264 determina que, en el caso del divorcio, cada cónyuge pierde el uso del apellido de su cónyuge. Sin embargo, uno de los cónyuges puede conservar el uso del apellido del otro, ya sea con el consentimiento de este o con el permiso del Juez, si tiene un interés especial para él o para los hijos⁷⁸. En la separación de los cónyuges, o separación de los cuerpos, en cambio, el artículo 300 indica que cada uno de los cónyuges separados conserva el uso del apellido del otro;

⁷⁴ Article 311.23: “Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent. Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire”. *Code Civil*. Puede consultarse en <https://www.legifrance.gouv.fr/>

⁷⁵ Article 311.24: “La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 311-23 ne peut être exercée qu'une seule fois”. *Code Civil*. Puede consultarse en <https://www.legifrance.gouv.fr/>

⁷⁶ FERNÁNDEZ PÉREZ, E.A., “El nombre y los apellidos...”, *op. cit.*, pg. 604.

⁷⁷ LINACERO DE LA FUENTE. M., “El nombre...” *op. cit.*, pg. 124.

⁷⁸ Article 264: “A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants”. *Code Civil*. Puede consultarse en <https://www.legifrance.gouv.fr/>

ahora bien, en juicio de separación o en una sentencia posterior se le podrá impedir tal uso, teniendo en cuenta las circunstancias⁷⁹.

2.2 Estudio comparado

En el ordenamiento francés rige el sistema de un único apellido: las personas solo tienen un apellido, y se puede transmitir al hijo un apellido simple por progenitor o los dos unidos en el orden que elijan. En España en 1986 se deroga el artículo 57.3 de la Ley 17/1957 del Registro Civil, donde se estipulaba la llamada infungibilidad de líneas que impedía tanto la unión de los apellidos paterno y materno como primer o segundo apellido, como la inversión del apellido del padre por el de la madre, por lo que en la actualidad sí se permite la unión de los apellidos de los progenitores formando un apellido compuesto; la diferencia reside en que, en España, rige el sistema del doble apellido.

En ambos casos es necesario el consenso, es decir, en el caso francés los progenitores deben ponerse de acuerdo, o bien para determinar quién transmite su apellido, o bien para escoger el orden en que transmiten su apellido simple creando uno compuesto; en el caso español, en cambio, como la filiación determina los apellidos y son siempre los dos progenitores los que transmiten su respectivo primer apellido, deberán decidir entre ambos en qué orden lo harán.

En Francia, al igual que en España, se acaba con el criterio tradicional de primacía del apellido paterno. Pero la diferencia entre ambas legislaciones se encuentra en la solución ante la falta de acuerdo entre los progenitores: mientras en España, la decisión sobre el orden en que han de imponerse los apellidos al menor se encomienda al Encargado del Registro Civil, quien deberá tener en cuenta su interés general, en Francia, se opta por un criterio menos controvertido, ya que se impondrán al menor los apellidos de ambos progenitores unidos por orden alfabético.

Tanto en Francia como en España, como no podría ser de otra manera, el apellido elegido para el primero de los hijos o, en el caso de España, el orden de los apellidos elegidos para el primero de los hijos, se aplicará al resto de los hijos comunes.

⁷⁹ Article 300: “Chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre. Toutefois, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire”. Code Civil. Puede consultarse en <https://www.legifrance.gouv.fr/>

En caso de que solo se determine la filiación respecto a un progenitor, en ambos casos se reconoce que el hijo llevará el apellido del mismo, apellidos en el supuesto español.

Del mismo modo, en el caso francés, se permite que, cuando se establezca la segunda filiación, los padres puedan sustituir el apellido impuesto por el de ese segundo progenitor o unir sus apellidos en el orden elegido por ellos, dentro del límite de un apellido por progenitor. Así como en el régimen español, pues si con posterioridad a la inscripción se reconoce esa segunda filiación no se establece una prioridad temporal de sus apellidos, por lo que se puede atribuir al hijo el primer apellido de la filiación determinada con posterioridad, siempre que así se declare ante el Encargado del Registro Civil.

Por último, en relación al uso de los apellidos tras el matrimonio, el régimen francés reconoce la posibilidad de que el cónyuge, tras el matrimonio, emplee “*a título de uso*” el apellido del otro cónyuge, sustituyéndolo o añadiéndolo a su propio apellido en el orden que elija. En España no se reconoce esta posibilidad, pues el matrimonio no surte ningún efecto sobre los apellidos del cónyuge y, además, en España no existe la distinción de uso de un apellido para la vida cotidiana y otro para los actos relativos al estado civil.

3. Italia

3.1 Normativa

En la normativa italiana la reforma en el Derecho de familia no ha supuesto un tratamiento avanzado en el orden de imposición del apellido (*cognome*), pues permanece el criterio basado en la primacía del hombre dentro de la familia y del matrimonio, la figura del padre de familia, por lo que se impone el apellido paterno⁸⁰.

En primer lugar, en cuanto a la regulación de los apellidos de los hijos, la redacción originaria del *Codice Civile*, redactado conforme a la Ley de 18 de mayo de 1975, distinguía entre filiación legítima y filiación natural o ilegítima. En el primero de los casos, el *cognome* que se transmitía es el que correspondía a la línea paterna, mientras que en la filiación ilegítima el hijo llevaba el apellido del progenitor que antes le hubiera reconocido, si los dos progenitores le reconocían al mismo tiempo llevaría el

⁸⁰ LINACERO DE LA FUENTE. M., “*El nombre...*”, *op., cit.*, pg. 127.

apellido paterno, y si era el padre el que le reconocía con posterioridad el hijo podría adoptar su apellido añadiéndolo o sustituyendo al de la madre. En cualquier caso, cuando el hijo ilegítimo alcanzaba la mayoría de edad podía solicitar al juez adoptar el apellido paterno⁸¹.

Pero el Decreto Legislativo de 28 de diciembre de 2013, n. 154, -en vigor desde el 7 de febrero de 2014-, modificó todos los preceptos del *Codice Civile* que pudieran provocar cualquier tipo de discriminación, para garantizar la igualdad jurídica entre los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio⁸². Así, solo se distingue entre hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio.

En relación a los hijos nacidos dentro del matrimonio se mantiene que es el apellido paterno el que se impone. Mientras que con los hijos nacidos fuera del matrimonio el artículo 262 el *Codice Civile* mantiene una regulación similar a la existente antes del Decreto Legislativo de 2013, pues dicho artículo establece que el hijo llevará el apellido del progenitor que primero le reconociese y, si los progenitores le reconocen al mismo tiempo, llevará el apellido paterno. En caso de que la filiación paterna se determine con posterioridad a la materna, el hijo podrá añadir el apellido paterno sustituyéndolo o uniéndolo al de la madre. Por lo que hasta aquí la regulación es la misma, solo que cambian las alusiones al “hijo ilegítimo”, entendiéndolo ahora por hijo nacido fuera del matrimonio. La novedad está en que, en caso de que la filiación se haya reconocido tras la imposición del apellido por el oficial de estado civil, el hijo puede continuar con el apellido atribuido cuando el mismo se haya convertido en un signo de su identidad, uniendo, anteponiendo o sustituyendo el apellido del progenitor que primero le reconoció, o al del padre, si lo hubieran hecho ambos al mismo tiempo. Por último, concluye diciendo que, en caso de minoría de edad del hijo, decidirá el juez sobre su apellido, tras escuchar al menor siempre que hubiera cumplido 12 años.

En cuanto al *Ordenamento dello stato civile*, cabe destacar el artículo 33 que regula la imposición del apellido al niño:

“Las instrucciones sobre el apellido.

- 1. El hijo legitimado tendrá el apellido del padre, pero, si es mayor de edad en la fecha de su legitimación, podrá elegir, dentro del año siguiente desde el*

⁸¹ LINACERO DE LA FUENTE. M., “*El nombre...*”, *op. cit.*, pg. 128.

⁸² FERNÁNDEZ PÉREZ, E.A., “*El nombre y los apellidos...*”, *op. cit.*, pg. 626.

día de su reconocimiento, entre mantener el apellido que venía usando previamente, si es diferente, o unirlo o sustituirlo por el apellido del progenitor que le haya reconocido, a su elección.

2. *El mismo derecho a elegir se concede al hijo adulto que sufre un cambio o modificación de su apellido tras el cambio del apellido del progenitor del que proviene el suyo, así como el hijo mayor de edad de padres desconocidos, después de alcanzar el mayoría de edad, por un padre o simultáneamente de ambos.*
3. *Las declaraciones mencionadas en los apartados 1 y 2 serán expuestas al oficial civil del lugar de nacimiento por el niño en persona o mediante comunicación escrita. La misma se incorporará en el acta de nacimiento del hijo”.*

El artículo 34 del *Ordinamento dello stato civile* señala los límites existentes a la hora de atribuir un apellido a un hijo de padres desconocidos, y no podrá imponerse ninguno de importancia histórica, ni que corresponda con una familia de relevante importancia en la localidad en la que el hijo haya nacido⁸³.

En lo que refiere a los apellidos de la mujer casada, el artículo 143 bis del *Codice Civile* mantiene con el patrón tradicional: “*La mujer añade a su propio apellido, el del marido, el cual conserva durante su viudez, hasta que contraiga nuevas nupcias*”⁸⁴. Por lo que la mujer conserva el apellido del difunto marido hasta que contraiga nuevo matrimonio.

En caso de que se disuelva el matrimonio mediante divorcio, el artículo 156-bis determina que el tribunal puede prohibir a la mujer usar el apellido de su marido cuando tal uso sea perjudicial para él, y también puede permitir que la mujer no use su propio apellido si esto puede causarle perjuicios⁸⁵.

⁸³ FERNÁNDEZ PÉREZ, E.A., “*El nombre y los apellidos...*”, *op. cit.*, pg. 628.

⁸⁴ Artículo 143-bis: “*Cognome della moglie. La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze*”.

⁸⁵ Artículo 156-bis: “*Cognome della moglie. Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio*”. Codice civile. Puede consultarse en www.altalex.com

A estos efectos es importante tener en cuenta la Ley 898, de 1 de diciembre de 1970, sobre la disciplina de la disolución del matrimonio, cuyo artículo 5 se manifiesta en los siguientes términos:

“La mujer pierde el apellido que había añadido al suyo después del matrimonio. El tribunal, en la sentencia donde se pronuncia sobre la disolución o terminación de los efectos civiles del matrimonio, puede autorizar a la mujer que lo solicite a mantener el apellido del marido unido al suyo, cuando haya un interés suyo o de sus hijos digno de protección. La decisión mencionada en el párrafo anterior puede ser modificada por decisión posterior, por razones de especial gravedad, a petición de cualquiera de las partes”⁸⁶.

Un hecho importante es que, ya en la legislatura de 1982, en la Cámara de los Diputados se presentó una propuesta de ley para sustituir el actual artículo 143-bis por la siguiente norma:

“En el momento de celebración del matrimonio, los esposos, a través de una declaración al funcionario del Registro Civil, elegirán cuál de los apellidos será el apellido familiar y el atribuido a los hijos. El cónyuge cuyo apellido no se haya elegido mantiene el propio y puede añadirlo al apellido familiar”⁸⁷.

Pues la jurisprudencia anterior a la reforma de 1975 reconocía el derecho de la mujer de añadir su apellido al del marido, así como la doctrina, que ha hablado de la posibilidad de adoptar otros sistemas de semejanza de algunas legislaciones, como puede ser la elección del apellido familiar en el momento en que se celebra el matrimonio⁸⁸. A pesar de esto, y de que el artículo 29.2 de la Constitución de la República Italiana establezca que el matrimonio se basa en la igualdad moral y jurídica de los cónyuges⁸⁹, el Tribunal Constitucional italiano ha justificado en múltiples

⁸⁶ Articolo 5: “La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, puo' autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei Figli meritevole di tutela. La decisione di cui al comma precedente puo' essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravita', su istanza di una delle parti”. Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio. Puede consultarse en www.altalex.com

⁸⁷ LINACERO DE LA FUENTE. M., “El nombre...”, op., cit., pg. 128.

⁸⁸ SANTORO PASSARELLI, “Comentario alla riforma del diritto di famiglia” a cura di Carraro-Oppo, Trabuchi, I.I., Cedam, 1977. Pg. 234.

⁸⁹ Artículo 29: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti

ocasiones que se utilice únicamente el apellido del marido en el principio de la unidad familiar⁹⁰, aunque como veremos a continuación esto está cambiando.

3.2 Análisis jurisprudencial a raíz del juicio NO. 286 del 8 de noviembre - 21 de diciembre de 2016 de la Corte Constitucional Italiana.

En este caso se plantea la constitucionalidad de la norma prevista en los artículos 237, 262 y 299 del Código Civil, en la medida en que dichos preceptos prevén la atribución automática del apellido del padre a los hijos, aun existiendo una voluntad contraria por parte de los padres. La cuestión había sido planteada por el Tribunal de Apelación de Génova por el rechazo del Encargado del Registro Civil de la solicitud de imponer al hijo de los demandantes el apellido materno junto con el paterno. Los padres alegaron a la Corte:

- violación del artículo 2 de la Constitución como consecuencia de la invasión del derecho a la identidad personal, que implica el derecho de cada individuo al reconocimiento de los identificadores de la rama de cada uno de los padres.
- vulneración de los artículos 3 y el 29.2 de la Constitución debido a la violación del derecho a la igualdad y a la dignidad de los padres tanto en su relación con los hijos como entre ellos mismos.
- violación del artículo 117.1 de la Constitución en relación con el artículo 16.1.g) de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, número 1271, de 28 de abril de 1995, y número 1362, de 18 de marzo de 1998, y la Resolución número 37, de 27 de septiembre de 1978, relativa a la creación de una plena igualdad entre los padres en la atribución del apellido a los hijos.
- inconstitucionalidad de la norma que prevé la atribución automática del apellido del padre a un hijo, incluso si así lo desean los padres. Dicha norma se desprende de los artículos 237, 262 y 299 del Código Civil.

dalla legge a garanzia dell'unità familiare". Costituzione della Repubblica Italiana. Puede consultarse en <http://www.normattiva.it/>

⁹⁰“La Corte costituzionale, intervenuta sulla compatibilità del principio di eguaglianza del sistema di attribuzione del cognome ai figli, una ventina di anni or sono aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità posta al suo vaglio, pur non escludendo che la regola secondo la quale si trasmette ai figli il cognome paterno potesse essere superata a fronte dell'evoluzione dei costumi sociali. Chiamata nuovamente a pronunciarsi sul punto, la Corte costituzionale ha di recente rigettato la questione di legittimità costituzionale, affermando tuttavia l'urgenza di un intervento del legislatore per adeguare ai principi costituzionali un sistema in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dalla Carta fondamentale, ingiustificato in quanto retaggio di una concezione patriarcale della famiglia ormai tramontata”. SESTA. *Manuale di Diritto di famiglia*. Cedam. Padova, 2007. Pg. 210.

La Corte determina que la norma sobre la atribución automática del apellido del padre ha sido impugnada únicamente por no permitir a los padres que puedan solicitar conjuntamente la imposición al niño del apellido materno en el momento del nacimiento. El Tribunal determinó que ya había examinado en ocasiones anteriores las disposiciones relativas al apellido que se le atribuye al niño, y había dictaminado que eran inconstitucionales, quedando bajo la discreción del legislador la promulgación de una nueva legislación. Sin embargo, se reconoció expresamente en la Orden número 176 de 1988 que:

“sería posible, y probablemente de acuerdo con la evolución de la conciencia social, sustituir la regla actual en la determinación del apellido distintivo de los miembros de una familia establecida por el matrimonio con un criterio diferente que otorgue mayor respeto a la autonomía de la pareja casada, y que puede conciliar los dos principios consagrados en el artículo 29 de la Constitución”.

Dieciocho años más tarde, sin que el régimen normativo hubiese cambiado, en el Juicio no. 61 de 2006, este Tribunal determinó expresamente que la norma examinada no era compatible con los valores constitucionales de igualdad moral y jurídica entre el hombre y la mujer. El sistema existente para atribuir el apellido se definió como:

“El legado de una concepción patriarcal de la familia arraigada en la tradición romana del derecho de familia y de un poder dentro del matrimonio que ahora es una cosa del pasado y ya no es consistente con los principios subyacentes del ordenamiento jurídico y el valor constitucional de la igualdad entre hombres y mujeres”.

Pero, a pesar de que han transcurrido muchos años desde estas sentencias, todavía no se ha establecido un criterio distinto que otorgue mayor respeto a la autonomía del matrimonio. Los esfuerzos que se están realizando para preparar cambios legislativos que regularán la atribución de apellidos a los niños según criterios actuales siguen en curso. Así, dentro de la familia fundada en el matrimonio todavía no es posible que la madre transmita su propio apellido a sus hijos, o que el niño lleve el apellido materno desde el nacimiento.

El Tribunal considera que esta exclusión es perjudicial para el derecho del niño a la identidad personal y, al mismo tiempo, implica una diferencia de trato entre hombres y mujeres, lo cual no está justificado por el objetivo de salvaguardar la unidad familiar.

Debido al valor de la identidad del individuo y a la importancia del derecho al apellido propio como expresión de pertenencia a un grupo familiar, puede concluirse que los criterios para atribuir el apellido a un menor constituyen aspectos decisivos de su identidad personal.

El marco pertinente también incorpora la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha clasificado el derecho a la protección que ofrece el artículo 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 e implementado por la Ley n. 848, de 4 de agosto de 1955. En particular, en la sentencia *Cusan Fazzo c. Italia*, de 7 de enero de 2014, dictada tras la orden de remisión examinada, el Tribunal de Estrasburgo afirmó que la incapacidad de los padres para atribuir el apellido de la madre a un niño en lugar del apellido del padre constituyó una violación del artículo 14 (Prohibición de la discriminación), en relación con el artículo 8 (Derecho al respeto de la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, resultante de una laguna en el derecho italiano.

El Tribunal Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales también sostuvo que esta imposibilidad no podía ser contrarrestada con una autorización administrativa para cambiar el nombre de los niños menores de edad añadiendo el apellido de la madre al paterno. Para lograr la plena y efectiva realización del derecho a la identidad personal, su primera y más inmediata expresión en el apellido, debe ser reconocido el derecho del niño a ser identificado desde el nacimiento por el apellido de ambos padres. Así, las disposiciones que dan prioridad absoluta al apellido del padre sacrifican el derecho del niño a la identidad, negándole la posibilidad de ser identificado también por el apellido materno.

Otro motivo paralelo de inconstitucionalidad es la violación del principio de igualdad entre marido y mujer, y la Corte señala que la diferencia de trato para el marido y la mujer en relación a la transmisión de sus apellidos no está justificada ni por el artículo 3 de la Constitución ni por el objetivo de salvaguardar la unidad de la familia, de conformidad con el artículo 29.2 de la Constitución. Determina que esta diferencia

de trato entre los cónyuges en la atribución del apellido a los hijos, como expresión de una concepción patriarcal, ahora anticuada, es también incompatible con el principio de igualdad y con el principio de igual dignidad moral y jurídica para los cónyuges.

Pero la Corte señala que, a falta de acuerdo entre los padres, la regla general de que el apellido del padre se imponga seguirá siendo aplicable hasta la promulgación de la legislación coherente con el principio de igualdad.

Sobre esta base, la Corte Constitucional italiana declara inconstitucionales:

- 1) la regla que se desprende de los artículos 237, 262 y 299 del Código Civil, en la medida en que no permite a los cónyuges transmitir el apellido paterno al hijo por mutuo acuerdo.
- 2) el artículo 262 del Código Civil, en la medida en que tampoco permite a los cónyuges de mutuo acuerdo atribuir el apellido materno al hijo es inconstitucional
- 3) el párrafo 3 del artículo 299 del Código Civil, en la medida en que no permite a los cónyuges atribuir también el apellido materno de mutuo acuerdo en el momento de la adopción, en el caso de que un niño sea adoptado por ambos.

3.3 Estudio comparado

Por lo que se refiere a la transmisión del apellido a los hijos, el régimen italiano es el que se revela más contrario al principio de igualdad entre hombres y mujeres. Aunque parece que está pendiente de una nueva normativa en la materia, la realidad es que en la actualidad es el apellido paterno el único que se transmite al nacido.

En Italia, al igual que en Francia, se emplea un único apellido, que en este caso será siempre el paterno. En cambio, en España contamos con el sistema de doble apellido, debiendo elegir los progenitores el orden en que quieren transmitir su correspondiente primer apellido.

En caso de que solo esté determinada la filiación materna, en el régimen italiano se estipula que si la filiación paterna se determina con posterioridad el hijo podrá añadir el apellido paterno sustituyéndolo o uniéndolo al de la madre. En el caso de España, también se reconoce la posibilidad de que se le atribuya al hijo el primer apellido de la filiación determinada con posterioridad, siempre que se rectifique registralmente. Por lo que en ambos casos se reconoce la facultad de que el hijo altere el orden de sus

apellidos cuando alcance la mayoría de edad, siempre que lo haga una declaración ante el Encargado del Registro Civil. Además, este cambio puede afectar a los sujetos a su patria potestad o a sus descendientes si expresamente lo consienten.

Para los supuestos en los que la filiación no esté determinada, el sistema italiano es más restrictivo sobre los límites de los apellidos que se deben atribuir al hijo, pues no podrá imponerse ninguno de importancia histórica, ni que corresponda con una familia de relevante importancia en la localidad en la que el hijo haya nacido. Por el contrario, la Ley del Registro Civil solo indica que los apellidos serán de uso corriente y no deberán indicar su origen desconocido.

Por último, en el caso de Italia la mujer adquiere el apellido del marido tras el matrimonio, por lo que se pierde el apellido materno. Cosa muy distinta ocurre en España, donde la mujer mantiene su apellido tras el matrimonio, pues este no surte ningún efecto sobre los apellidos de los cónyuges.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Es universal la necesidad que existe en toda comunidad de individualizar e identificar a las personas mediante el nombre y apellido, aunque las características de los mismos varíen en función de elementos culturales del lugar.

SEGUNDA.- En el ámbito internacional se reconoce el “*derecho al nombre*” en la Declaración Universal de los Derechos del Niño de 1959, así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, y la Comisión Internacional del Estado Civil ha desarrollado diversos Convenios que afectan directamente al nombre y a los apellidos.

TERCERA.- En la Unión Europea se ha avanzado en el tratamiento del apellido por la importancia que tiene sobre los derechos fundamentales y los derechos de la personalidad. El principio de igualdad entre ambos sexos está consagrado en las constituciones de todos los Estados Miembros, pero no se ha desarrollado en todos los ámbitos; por ello el Ordenamiento comunitario insiste en la necesidad de que esa igualdad jurídica se vea reflejada en la realidad, aunque el nombre y apellido constituyan una materia de competencia exclusiva de los legisladores nacionales.

CUARTA.- El nombre y los apellidos se configuran como un elemento de identidad de toda persona, que se establece en el momento de la inscripción de su nacimiento y deriva del derecho de la personalidad.

QUINTA.- La lucha por el respeto del principio de igualdad de sexos en el uso de los apellidos, en España, no es nueva. Tras la última modificación normativa que terminará de materializarse con la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil, la filiación sigue siendo el instrumento que determina los apellidos. Ahora bien, la ley ya no fija el orden en que se transmiten los apellidos; son los progenitores los que deben acordar el orden de transmisión de su respectivo primer apellido. Y, en caso de desacuerdo, será el Encargado del Registro Civil quien lo fije atendiendo al interés superior del menor. Y aquí es donde vienen los problemas. Desde nuestro punto de vista no parece una decisión suficientemente motivada y adecuada para resolver este problema legal, pues el interés superior del menor aparece como un concepto indeterminado, y este problema se acaba trasladando al Encargado del Registro Civil, quien decidirá atendiendo a diferentes criterios en función de lo que considere que es mejor para el menor.

SEXTA.- En Portugal, al igual que sucede en España, el Código Civil exige, en primer término, el consenso de los padres: los padres han de ponerse de acuerdo para determinar el apellido que llevará su hijo, podrán imponerse hasta cuatro apellidos, y podrán escogerse entre los de ambos progenitores, cualquier de los que estos tengan derecho a uso o por los que fueran conocidos.

Ahora bien, a falta de este acuerdo, en nuestro país vecino es el juez el que decidirá teniendo en cuenta los intereses del hijo; en España, como hemos dicho, con la nueva normativa es el Encargado del Registro Civil el que se encargará de establecer el orden en que se impondrán los apellidos, labor que desarrollará teniendo en cuenta el interés del menor, con todos los problemas de interpretación que esto conlleva en ambos Ordenamientos.

La mujer no pierde sus apellidos una vez que contrae matrimonio ni en Portugal ni en España; en ambos países se reconoce la posibilidad de la mujer de transmitir sus apellidos a sus hijos en régimen de igualdad con el marido. Sin embargo, esa igualdad jurídica –reconocida antes en Portugal que en España- parece verse enturbiada en el país luso por la existencia de la siguiente costumbre: los portugueses normalmente utilizan sólo su segundo apellido, el cual suele ser el del padre.

SÉPTIMA.- En Francia, rige el sistema de un único apellido frente al sistema español de doble apellido, pero en ambos casos se permite que se unan los apellidos de los progenitores formando un apellido compuesto.

En los dos regímenes se exige el consenso de los progenitores para transmitir sus apellidos. En caso de falta de acuerdo, en Francia se impondrán los apellidos de los progenitores unidos por orden alfabético, lo que podría suponer una progresiva desaparición de los apellidos que comienzan por las últimas letras del abecedario, aunque sí parece ser un criterio menos controvertido que en España, donde, como hemos dicho, se deja la decisión en manos del Encargado del Registro Civil quien ha de atender al interés superior del menor, lo que, a nuestro modo de ver, genera cierta inseguridad jurídica.

En el país galo, además, se admite el uso de un apellido para la vida cotidiana y de otro para los actos relativos al estado civil, de manera que, tras el matrimonio, el cónyuge puede emplear “*a título de uso*” el apellido del otro cónyuge.

OCTAVA.- La normativa italiana es la que parece encontrarse menos avanzada si la comparamos con los anteriores, rigiendo el sistema de apellido único (como en Francia), permanece el criterio basado en la primacía del hombre dentro de la familia: es el apellido paterno el único que se transmite por parte de los progenitores.

Además, tras el matrimonio la mujer adquiere el apellido del cónyuge, por lo que el apellido materno se pierde.

Tras la Sentencia NO. 286 del 8 de noviembre - 21 de diciembre de 2016 de la Corte Constitucional Italiana, parece que se va a llevar a cabo el imprescindible cambio normativo sobre la regulación del apellido. Tradicionalmente se fundamentaba esta normativa en el objetivo de salvaguardar la unidad de la familia, conforme al artículo 29.2 de la Constitución Italiana; pero la Corte Italiana considera que esta diferencia de trato entre los cónyuges en la atribución del apellido a los hijos, como expresión de una concepción patriarcal anticuada, es también incompatible con el principio de igualdad y con el principio de igual dignidad moral y jurídica para los cónyuges. A pesar de esto, a falta de acuerdo entre los padres, la regla general es que el apellido del padre se imponga, y así seguirá siendo hasta que se promulgue una legislación coherente con el principio de igualdad.

NOVENA.- El estudio de Derecho Comparado que hemos realizado nos permite entender los distintos regímenes de atribución de los apellidos en algunos países de la Unión Europea, y cómo han ido progresando los mismos hacia la igualdad de sexos.

El sistema de Portugal es el más parecido al español, aunque la práctica difiere mucho de la igualdad que promulga. Francia e Italia, por su parte, mantienen más similitudes entre sus respectivos regímenes, pues en ambos casos el matrimonio surte algún efecto en los apellidos de los cónyuges. Pero, sin lugar a dudas, es el caso italiano el que más necesita avanzar para abandonar el sistema tradicional de primacía del apellido paterno, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional en la jurisprudencia que hemos estudiado.

Ciertamente, se está tratando de lograr la igualdad de sexos en este ámbito; poco a poco las legislaciones de los Estados se están adaptando a los cambios de mentalidad de esta sociedad del siglo XXI, pero los avances son demasiado lentos.

BIBLIOGRAFÍA

BATLLE. “El derecho al nombre”, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, nº 159. Septiembre de 1931. Pág. 267.

CORERA IZU, M. “El asiento del nacimiento en la nueva Ley del Registro Civil. La problemática de la filiación”, *Diario La Ley*, Nº 8686, 21 de Enero de 2016, Ref. D-30, (LA LEY 36/2016).

DE RAMÓN FORNS, I., “Orden de los apellidos y discriminación”, *Diario La Ley*, Nº 7233, Septiembre 2009, Ref. D-273, (LA LEY 13580/2009).

EGUSQUIZA BALMASEDA, M., “Derecho al apellido: tradición, igualdad y ciudadanía europea”, *Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional* num.11/2005. 2005. Págs. 97-116.

FERNÁNDEZ PÉREZ, E.A., “*El nombre y los apellidos, su regulación en derecho español y comparado*” (Tesis doctoral) Universidad de Sevilla, Sevilla. 2015. Disponible en <https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/32106/TESIS%20definitiva.pdf;sequence=1> (Consultado el 15/02/2017)

GALLARDO RODRÍGUEZ, A., “La novedad legislativa española en el orden de los apellidos de los hijos: un ejemplo a seguir por el resto de países europeos” *Revista General de Derecho Público Comparado*, Nº 10, Enero 2012.

LASARTE, C., *Derecho de Familia. Principios de Derecho Civil VI*, Marcial Pons, 2011. Pág. 182.

LINACERO DE LA FUENTE, M.

- *El nombre y los apellidos*. Tecnos. Madrid, 1992. Págs. 122-133.
- “El principio de igualdad en el orden de transmisión de los apellidos. El art. 49 de la nueva Ley del Registro Civil”, *Diario La Ley*, Nº 15-16, septiembre 2012, tomo 2, (LA LEY 7823/2012). Págs. 1611-1621.

LÓPEZ JARA, M. “El orden de los apellidos en los supuestos de filiación determinada judicialmente. El superior interés del menor”, *LA LEY Derecho de Familia*, Nº 9, Primer trimestre 2016, (LA LEY 46/2016).

MAGALLÓN ELÓSEGUI, N. “La DGRN ante la jurisprudencia europea en materia de nombre y apellidos”, *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. LXII/2, 2010. Págs. 149-164.

MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, J., “La falta de competencia de la UE para elaborar un código civil europeo: sobre los límites a la armonización en materia de Derecho civil”, en CÁMARA LAPUENTE, S. (coord.), *Derecho Privado Europeo*, Colex, Madrid, 2003. Págs. 129-156.

MARTÍNEZ LÓPEZ-PUIGCERVER, A. “La mujer y sus apellidos: de la alegría de transmitirlos (Ley 40/1999), a la tristeza del cambio y pérdida de los apellidos de la mujer víctima de la violencia de un hombre (Ley Orgánica 1/2004, de 38 de diciembre)”, *Diario La Ley*, 2008. (LA LEY 17094/2008).

ORDÁS ALONSO, M. “Imposición al menor del apellido paterno: igualdad, derecho a la propia imagen, interés del menor” *Derecho Privado y Constitución*, N° 28, enero-diciembre 2014. Págs. 47-92.

PAZ SÁNCHEZ GONZÁLEZ, M., “El orden originario de los apellidos”, *Revista jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres*, N° 9, 2002. Págs. 10-16.

QUICIOS MOLINA, S., “Comentario al artículo 109 del Código Civil”, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coordinador), *Comentarios al Código Civil*, Aranzadi, 2001, Navarra. Pág. 221.

RIVERO HERNÁNDEZ, F., *El interés del menor*, 2.ª ed., Dykinson, Madrid, 2007.

SANTORO PASSARELLI, “Comentario alla riforma del diritto di famiglia”, a cura di Carraro-Oppo, *Trabuchi*, I.1., Cedam, 1977.

SESTA. *Manuale di Diritto di famiglia*. Cedam. Padova, 2007.

TORRELLES TORREA, E., “La elección del orden de los apellidos por parte de los progenitores y los criterios de determinación a falta de acuerdo de la Ley de Registro Civil de 2011”, *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, N.º 753, Enero 2016. Págs. 185-222.

VERDERA SERVER, R., “Comentario al artículo 109 del Código Civil”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (director), *Comentarios al Código Civil*, Tirant lo Blanch, 2013, Valencia. Págs. 1136-1142.

LEGISLACIÓN

1. Normas, Declaraciones y Convenios Internacionales

- Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Lisboa, 1 de diciembre de 2009.
- Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer. Nueva York, 18 de diciembre de 1979.
- Convenio nº 19, sobre ley aplicable a nombre y apellidos. Múnich, 5 de septiembre de 1980.
- Convenio nº 21, relativo a la expedición de certificados de diversidad de apellidos La Haya, 8 de septiembre de 1982.
- Convenio nº 31, relativo al reconocimiento de apellidos atribuidos al nacer o modificados, especialmente por razón de matrimonio, divorcio o cualquier otra causa. Anatolia, 19 de septiembre de 2005.
- Convenio nº 4 sobre cambio de nombre y apellidos. Estambul, 4 de septiembre de 1958.
- Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o Convenio Europeo de Derechos Humanos. Roma, 1950.
- Convenio-marco para la protección de las minorías nacionales. Estrasburgo, 1 de febrero de 1995.
- Declaración de igualdad entre hombres y mujeres. Comité de Ministros (83ª) Reunión, 16 de noviembre de 1988.
- Declaración Universal de los Derechos del Niño. Nueva York, 20 de noviembre de 1959.
- Pacto Internacional de los Derechos civiles y políticos. Nueva York, 29 de diciembre de 1966.
- Recomendación CM/R (2007) 17, sobre igualdad de género. Comité de Ministros, 21 de noviembre de 2007.
- Recomendación nº R (85) 2, relativa a la protección jurídica contra la discriminación por razón de sexo. Comité de Ministros, 5 de febrero de 1985.
- Resolución (78) 37, sobre la igualdad de los esposos en Derecho Civil, Comité de Ministros, 27 de septiembre de 1978.
- Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Lisboa, 13 de diciembre de 2007.

2. Normativa española

- Ley Provisional de Registro Civil, de 17 de junio de 1870.
- Reglamento del Registro Civil, de 13 de diciembre de 1870.
- Real Decreto de 24 de julio de 1889, que promulgó el Código Civil.
- Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil.
- Constitución Española (BOE 311 de 29 de diciembre de 1978).
- Ley 11/1981, de 13 de mayo, modifica el Código civil en materia de filiación.
- Real Decreto 1917/1986, de 29 de agosto, que modifica artículos del Reglamento del Registro Civil.
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor.
- Ley 40/1999, de 5 de noviembre, sobre nombre y apellidos y orden de los mismos.
- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
- Ley 13/2005, de 1 de julio, que modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.
- Real Decreto 170/2007, de 9 de febrero, que modifica artículos del Reglamento del Registro Civil.
- Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
- Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria.
- Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil.
- La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

3. Ordenamientos jurídicos extranjeros

3.1 Portugal

- Código civil (Decreto Ley 47344/1966, de 25 de noviembre).
- Código do Registro Civil (Decreto-Lei 131/95, de 6 junho).

3.2 Francia

- Code Civil.
- Ley 85-1372 de 23 de diciembre de 1985, relativa a la igualdad de los esposos en los regímenes matrimoniales.

- Ley 2002-304 de 4 de marzo de 2002, relativa al apellido.
- Ordonannce 2005-759 de 4 de julio de 2005, relativa a la filiación.
- Ley 2013-404 de 17 de mayo de 2013, que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo.

3.3 Italia

- Codice Civile, de 16 de marzo de 1942.
- Costituzione della Repubblica Italiana, de 127 de diciembre de 1947.
- Ley 898, de 1 de diciembre de 1970, de disciplina en los casos de disolución del matrimonio.
- Ordinamento dello stato civile (Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127).